De nuevas definiciones y viejas realidades

COMO HEMOS visto las crisis bancarias del inicio de los años veinte mantuvieron una estrecha relación con la deficiente legislación del ramo. Esta circunstancia había sido vista tan tempranamente que ya para 1928 los profesores Joseph E. Sterrett y J. Stancliffe Davis podían mostrar el estado de los asuntos financieros incluso con una perspectiva histórica, comentando en su informe al Comité Internacional de Banqueros que la reforma porfiriana a la legislación financiera (practicada en junio de 1908 y misma que había modificado la ley general de instituciones financieras de marzo de 1897), en realidad “nunca había sido sometida a una prueba efectiva”.³²⁰ Desdichadamente, las pruebas habían llegado en momentos pésimos y continuarían durante otros que tampoco brindarían las condiciones más deseables. Con justicia, en muchas ocasiones durante los 20 años (y más) que mediaron entre el juicio de los asesores de la banca internacional y la reforma porfiriana se puede hablar de pruebas y de búsqueda de aprendizaje, pues se trató de un periodo fértil en fórmulas financieras y en el que, además, de manera simultánea, los revolucionarios redefinieron el perfil del Estado mexicano.

En materia bancaria, la experiencia de los primeros años del obregonato distó de ser satisfactoria. La alentadora promesa de la desincautación, pues se revelaba como anuncio de una era de conciliación con la banca, así como las negociaciones con el Comité Internacional de Banqueros en vista de solucionar la deuda mexicana fueron sin embargo objetadas por la crisis que golpeó a los bancos comerciales de segunda clase. Crisis que dejaría secuelas claras incluso hasta 1923,

³²⁰Cfr. Joseph Sterrett y J. Stancliffe Davis, *The Fiscal and Economic condition of Mexico. A Report submitted to the International Committee of Bankers on Mexico*. Edición privada, 25 de mayo de 1928. El origen del comité se remontaba a 1915 bajo la iniciativa del presidente de la firma inglesa Vivian H. Smith, socio de J.P. Morgan y Grenfell & Co., y representante de los tenedores de bonos británicos. Quienes, con ansiedad, veían cómo los mexicanos incumplían los compromisos contraídos con los préstamos realizados en 1899, 1910 y 1913. Debe señalarse, sin embargo, que esta primera iniciativa de 1915 apenas logró obtener ningún compromiso real del gobierno de Carranza, aunque sí consiguió establecer relaciones informales entre los inversionistas americanos, franceses e ingleses, lo cual allanó el camino para construir con bases más sólidas el Comité Internacional de Banqueros. Trabajos que comenzaron a perfilarse desde enero de 1919; cfr. *Memorandum on relations between the Department of State and the International Committee of Bankers on Mexico*, en *Morrow Papers*, rollo x, C. 3; anexo en carta de Allan Dawson a Dwight W. Morrow del 29 de agosto de 1929.

cuando se conjugaría con el cuestionamiento de los tratados internacionales recién alcanzados por el régimen obregonista, así como con una muy importante escisión militar que pretendería “encabezar” Adolfo de la Huerta y que estropearía aún más las finanzas públicas y la revitalización de la banca privada.

Adicionalmente, los problemas bancarios del comienzo de 1921 y del final de 1922 demostraron que, frente al peligro de los pánicos y de las quiebras existían muy pocas salidas y que éstas eran excesivamente lentas. Banqueros y funcionarios gubernamentales de la época pensaban que la ausencia de un banco central reforzaba las complicaciones típicas de los bancos en problemas de refinanciamiento. Una manifestación del problema trasluce en el lenguaje que empleaban los especialistas de la época, pues el refinanciamiento era entendido por los banqueros no como una regla institucional en la que podrían proteger sus actividades sino bajo la noción de “ayuda”; incluso era clasificada en el sentido literal de la palabra “promesa”. La que, por supuesto, estaba íntimamente penetrada de suspicacias e incertidumbre; pues al iniciar la reconstrucción posrevolucionaria resultaba muy elevada la probabilidad real de que dichas promesas no llegaran a materializarse. Esto era lo que había sucedido —como ya hemos visto—, con las solicitudes que hizo el Banco Francés al Nacional de México. Así pues, aunque un poco más tarde esta relación particular parecía haberse modificado,³²¹ lo cierto era que el problema de fondo continuaba y, ni el personalizado lenguaje de la “ayuda” ni las dificultades para encontrar salidas ágiles a los *cracks* mostraron alguna modificación notoria; naturalmente, esta circunstancia hacía muy difícil controlar la expansión de los márgenes de riesgo en el resto del sistema bancario.

En contraste, las relaciones *informales* que antaño habían prevalecido en las organizaciones bancarias parecían atravesar por un periodo de redefinición del que aún nos falta mucho por conocer. Durante el porfiriato las redes familiares y de lealtad decantaron grupos de poder económico y político lo mismo en niveles locales que regionales y multirregionales y, naturalmente, en su legislación definieron las posibilidades de las organizaciones bancarias. La revolución, aun aceptando todas las reservas del revisionismo historiográfico y todas las precisiones a nivel regional que deban de hacerse, colocó un punto de interrogación en el peso económico de las antiguas elites y su relación con el nuevo régimen. Ahora, pese a su gran resistencia y su probada capacidad para sobrevivir, se abría una

³²¹ Cfr. Libro 9 de Actas de Consejo del Banco Nacional de México (BNM), sesión del 9 de enero de 1923, ANH. Recordamos al lector que el Banco Francés se encontraba en proceso de liquidación, de hecho fue el síndico de éste el que solicitaría el crédito al que venimos a hacer referencia. El cual por cierto, no implicaba una suma demasiado grande (55,000 dólares), además de que todo indica que estaba razonablemente bien garantizado.

etapa de nueva definición, o por decirlo con otra connotación válida, de *reconstrucción*. Las viejas elites porfirianas competirían con las emergentes resolviendo sus embarazos legales y económicos ante un nuevo Estado envuelto en diversas dinámicas de transformación. Así, las negociaciones antiguas conocerían límites en las nuevas políticas y en decisiones de los funcionarios de la revolución, aunque también encontrarían oportunidades en la debilidad financiera del nuevo Estado y en su carencia de capital humano con la suficiente preparación y habilidades administrativas y ejecutivas que lo condujeran por su camino reconstructor.

En primer lugar este capítulo nos permitirá observar las secuelas de las crisis de 1921 y 1922 en casas bancarias provinciales y en una capitalina, la Compañía Bancaria Mexicana; misma que revela la presencia de una manifestación típica de reajuste económico: la centralización de capitales. En un segundo momento, al estudiar la compleja renegociación de la deuda observaremos el modo como afectó la inestabilidad política a la frágil situación institucional de la banca. Finalmente, esa situación sería uno de los motivos que conducirían a revolucionarios y banqueros a concluir que era necesario adelantar reformas y construir un nuevo consenso en una Convención Nacional Bancaria.

De las secuelas

Obregón entendió que su gobierno debía encabezar la reconstrucción del país y que ésta necesariamente involucraba la reactivación del crédito nacional e internacional; él sabía incluso que éste era un medio para afianzar la pacificación del país, por lo que pronto mostró propuestas para remediar la situación que padecía la banca. El alto riesgo bajo el que operaban la mayoría de las organizaciones bancarias era tema del dominio público y no sólo objeto de algún conocimiento secreto de la Secretaría de Hacienda o del Banco Nacional de México, organización que, como hemos visto, funcionaba como un peculiar banquero de bancos. Así, por más que estas últimas dependencias realmente asistieran a bancos en problemas no menos cierto era que sus acciones distaban de dar mayor solidez al sistema, lo que se explica en parte por qué sus acciones no se encuadraban por más objetivos comunes. Tal circunstancia disminuía el margen de eficacia de sus acciones.

De hecho el asunto que hemos llamado de las secuelas más bien lo deberíamos calificar como el de las *postrimerías* de la crisis de 1921. En tanto que la del final de 1922, puede verse como una continuación de ésta, que como sabemos golpeó también, en su inicio, al Banco Francés de México, para después conducir a otras insti-

tuciones a la suspensión de pagos. Vimos también la actitud diferencial del espontáneo prestamista de último recurso y la incertidumbre que padecían las firmas en problemas³²² y las condiciones que imponía a bancos que consideraba en un riesgo mayor, como la Casa Viya Hermanos.³²³ Pero estos refinanciamientos no estaban formalizados por el marco legal, de ahí que el mismo lenguaje de la época los clasifique como “ayudas”.

Además de este tipo de “ayudas” entre los bancos, durante este periodo de reajuste también se manifestó la *asistencia* gubernamental, acercando así las “nuevas políticas revolucionarias” a las viejas prácticas porfirianas. Como había sucedido en 1907-1908, los créditos interbancarios aumentaban en número y presumiblemente en monto, sin embargo, a diferencia de esos años los caminos del refinanciamiento eran menos claros para los empresarios. Empresas, casas bancarias y bancos en problemas de liquidez buscaban soluciones en los bancos más sólidos o bien recurriendo a la intercesión gubernamental. Pero al menos una de las salidas que ideó Limantour para aquella crisis, la creación de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Agricultura como medio para refinar a bancos refaccionarios con tasas de interés más bajas que las del mercado, ya no podía tener la misma fuerza ni extensión dado el deslucido poder económico del gobierno obregonista. Ahora incluso problemas de casas bancarias provinciales menores no podían ser suficientemente atendidos, así nos lo recuerda el ejemplo de la Casa Viya, o un poco después, desde Chihuahua, la Casa David Russek haciendo peticiones de fondos al Nacional de México, con resultados parecidos: Legorreta las rechazó. Sin embargo, al menos en el anterior caso, la *asistencia gubernamental directa* sustituyó el mecanismo mercantil de la *ayuda interbancaria*, pues, por intercesión de Adolfo de la Huerta, secretario de Hacienda del régimen obregonista, la decisión de Legorreta fue rectificada para aceptar la petición de la Casa Russek, sólo que, como podría sospechar el lector, el cargo no recayó

³²² Cfr. Libro 9, Actas de Consejo del Banco Nacional de México, sesión del 7 de noviembre de 1922, AHB. El monto de los préstamos ascendió a 673,000 pesos en el caso del Crédito Español y a 513,000 pesos para los empresarios regiомontanos. Apuntamos igualmente que el primer crédito se garantizó con acciones de la Compañía Harinera y Manufacturera Nacional y de la Compañía Explotadora de Minas, mientras que la segunda con documentos endosados a favor de los Zambrano por un valor de 25 por ciento superior al préstamo. El caso del Crédito Español y de la Compañía Harinera podrían haber estado vinculados con problemas de Julio Iduarte, accionista de ambas empresas. Pero, el de los banqueros regiомontanos estaba directamente ligado a la suspensión de pagos del Banco Francés.

³²³ *Idem.* La condición consistía en que “el Banco de Montreal estuviera dispuesto a ayudar con otra suma igual”; así lo había planteado la Casa Viya. Aunque no hay precisión de las razones de la solicitud es posible que obedecieran a los ciclos de la producción azucarera, como lo avala el que un año después la Casa Viya recurriera de nuevo a la solicitud que, en años anteriores, parecía satisfacer la Compañía Bancaria París México.

sobre el Nacional de México sino sobre los fondos gubernamentales depositados en las arcas de esta organización.³²⁴

Como el panorama de la banca mexicana prácticamente no parece haber cambiado durante los dos primeros años del obregonato no extraña que 1923 también haya comenzado con noticias de liquidaciones y con nuevos rumores sobre la solidez de dos bancos, el de Montreal y el Mercantile Banking Co., ambos de matriz extranjera.

Las noticias llegaron incluso a Sonora en donde hombres de negocios como Francisco Elías comenzaron a mostrar inquietud; bajo ese ambiente fue que éste ya destacado empresario regional solicitó información relativa a la veracidad de estos rumores a quien ya entonces era el más reconocido guía de su familia: Plutarco, quien fungía entonces como secretario de Gobernación.³²⁵ Plutarco Elías Calles le respondió escuetamente, “inexactas noticias prensa sobre cierre de bancos”.³²⁶ Desde luego, la respuesta del secretario de Gobernación atrae nuestra atención, pues su dicho no sólo se contradice con los problemas postreros que trajo la crisis del Banco Francés (cfr., *supra*) y con el testimonio que nos legó la prensa de la época, la cual entre otras noticias consignaba el 3 de enero que tendría lugar una asamblea de acreedores del Mercantile Banking Co. para buscar una solución extrajudicial a la liquidación por la que atravesaba. Un día después anunció el éxito de la reunión que los acreedores sostuvieron en el Salón de Actos de la Escuela de Jurisprudencia en San Ildefonso 28.³²⁷ Noticias similares ocurrieron en torno a otras dos organizaciones mexicanas, el Banco Francés y la Compañía Bancaria Monterrey S.A. (la cual también había sufrido con los problemas del primero), sólo que en estos casos el anuncio fue para señalar el próxi-

³²⁴Cfr. Libro 9, Actas de Consejo del BNM, 28 de noviembre de 1922, AHB. Se trató de 200,000 pesos que el Nacional descontó de los fondos gubernamentales depositados en sus arcas.

³²⁵ACT, PEC, Leg. 2/7. G-27 Telegrama de Francisco Elías a Plutarco Elías Calles del 15 de enero de 1923. En el que consignaba el cierre del Mercantile Banking Co. y los riesgos del Banco de Montreal. Pero los dichos de Francisco Elías parecían rumores, pues esa organización, The Canadian Bank of Commerce y The Anglo South American Bank Ltd. guardaban una solidez importante, al grado de que incluso se comentara que conservaban el 50 por ciento del crédito bancario privado en 1924; véase informe del cónsul británico a la Foreign Office, 31 de octubre de 1924, en Lorenzo Meyer (1991), *Su majestad británica contra la Revolución mexicana, 1900-1950. El fin de un imperio informal*. México, El Colegio de México, p. 392.

³²⁶Cfr. Plutarco Elías Calles a Francisco Elías, 19 de enero de 1923, en *idem*.

³²⁷Véase *Excelsior* del 3 y del 4 de enero de 1923. El día 4 se publicó la noticia de la ratificación del convenio preparado por el síndico de la liquidación, licenciado Agustín Garza Galindo, quien se mostró optimista para cubrir el pasivo total del Mercantile. Los acreedores confiaron su dicho al nombrarlo en el comité liquidador que incluía también a E. Darnielle, gerente del Express Wells Fargo Co., Pablo Langarica, gerente editorial de *Excelsior* y al licenciado José Estrada Otamendí, los representantes de los acreedores eran J.L. Starr y Manuel Gómez Morín.

mo reinicio de sus operaciones.³²⁸ En contra de la aclaración, es posible que la deliberada “inexactitud” con la que respondió el secretario de Gobernación se debiera al deseo de no alimentar el rumor con su palabra y con ello causar un daño efectivo al Banco de Montreal, en el que por cierto, la familia Elías Calles tenía depositados sus intereses.³²⁹ Ciertamente el Banco de Montreal no fue rigurosamente puesto a prueba bajo esa crisis, sin embargo, por otra razón, también los dichos del ministro dejaban de ser exactos; pues durante el comienzo de 1923 no sólo se reportarían desapariciones de bancos, sino que también ocurrirían procesos de absorción de organizaciones pequeñas por obra de las mayores. En consecuencia, la crisis también pareció reflejarse en casos que permiten suponer la presencia de un fenómeno de centralización de capitales que un poco adelante tendremos la oportunidad de observar. Antes, no obstante conviene recuperar, desde otro ángulo, el extrañamiento que nos causa la respuesta dada por Plutarco a Francisco S. Elías.

Atrás de la aparente sorpresa estaba la preocupación sobre el paulatino pero firme descenso de las actividades de la Compañía Bancaria Mercantil y Agrícola de Sonora, empresa en la que ambos eran socios. Para Plutarco Elías Calles, como para Obregón, la consolidación del carrancismo llegó en una etapa de madurez, fuerza y ambición; en una situación propicia para retraerse de sus actividades militares y emplear sus altos cargos públicos y su importante prestigio para consolidar su presencia política, así como sus proyectos económicos privados. A diferencia del Manco de Celaya, la carrera empresarial de Calles no tenía su eje exclusivamente en la agricultura, aunque ello no significara que la desconociera. Sus actividades, después de un breve paso por el magisterio, se desplegaron en un abanico muy amplio que incluyó la asociación con su hermano Arturo M. Elías (quien sería diplomático y destacado *broker* de la revolución carrancista y, posteriormente, de la aguapretense) para fundar un hotel en el puerto de Guaymas que correría la mala fortuna de incendiarse, poco después se convirtió en un pequeño agri-

³²⁸ Cfr. *Excelsior* del 11, 18 y 19 de enero de 1923; en este último había manifestación contra la opinión del abogado del Banco Francés donde se revelaba que Aimilien y Jules Lacaud eran los únicos accionistas que no habían pagado sus acciones. Su deuda, que también representaba a decir de Jules el producto de 27 años de trabajo, ascendía a “un millón y cuarto de pesos”. Los fondos que se obtendrían por el pago de las acciones eran de alrededor de un millón y medio de pesos.

³²⁹ Como socio mayoritario de la Compañía Bancaria Mercantil y Agrícola de Sonora (tenía la representación de 856 acciones de su capital social, equivalentes a 85,600 dólares), Plutarco mantuvo activo intercambio con el Banco de Montreal, cfr. ACT, PEC, inv. 496-Bis. Pero también atendía a generales importantes, como el futuro insurrecto Arnulfo R. Gómez, *ibidem*, Leg 5/7. G-36, núm. inv. 1722. El Banco de Montreal también fue usado en el giro de dinero para intrigas como lo muestra el caso del empleo de ex viliistas de Chihuahua, *ibidem*, Leg. 1. G-3, inv. 182.

cultor de la hacienda de Santa Rosa situada en las inmediaciones de Cananea,³³⁰ pero una fuerte helada al comienzo de 1906 terminó con sus expectativas para continuar este efímero oficio. Ahí coqueteó con la idea de consagrarse a la explotación minera y también ensayó con un pequeño molino en el que la suerte fue cambiante, pero al parecer suficiente para permitirle regresar a Guaymas y establecer junto con Santiago Smithers una negociación comercial en un inmueble que arrendaron a José María Maytorena, uno de los más destacados líderes de la oposición maderista en Sonora. Con su ascenso como gobernador del estado, Maytorena nombró a Calles comisario del pueblo fronterizo de Agua Prieta, lugar en el que por cierto ya había pensado en mudar su reciente negocio de Guaymas y en donde por primera vez empezó a alternar sus negocios y su carrera como funcionario público. Así, al finalizar la década inicial de la revolución, Calles no sólo había acumulado experiencia en ambos rubros; su fortuna también se había ensanchado aunque distaba de estar bien consolidada. Ésta se repartía en tres negocios: una tenería que veía crecer sus pérdidas, una mina llamada El Tramado que debió cerrar sus túneles en 1923 y la denominada Compañía Bancaria Mercantil y Agrícola de Sonora, de la que buena parte de sus 200,000 dólares de capital social inicial sirvieron para financiar a las dos primeras empresas. A decir de Macías Richard, la Bancaria “perdió todo el aliento inicial en 1922”. A su mala condición cooperaban las deficientes inversiones realizadas en la tenería y en El Tramado, tanto como la pésima administración de la que parece haber sido objeto, circunstancia que pudo reforzarse por la escasa atención que podía dispensarle Calles. De hecho no sabemos si sus problemas se vincularon con los *cracks* que afectaron otras compañías bancarias. Las que sufrieron con las distorsiones macroeconómicas que impuso la revolución, pero aún más por motivos específicos: debilidad interna, concentración imprudencial de riesgo, bajos estándares de solvencia, mala información del mercado, desconocimiento de sus acreedores, problemas del comportamiento gregario de su clientela al desatarse el pánico, etcétera. Sabemos que ese comportamiento jugó un papel definitivo para agravar el *shock* de 1921 y 1922, pues con su acción imitativa los prestatarios agotaron la débil liquidez de las bancarias colaborando así a reforzar la contracción del crédito bancario.

En escala reducida la crisis también trajo un fenómeno de centralización de capitales observable con el caso de la Compañía Bancaria Mexicana. Caso intere-

³³⁰El estudio biográfico más completo de Elías Calles nos sirve de base para seguir sus actividades empresariales hasta el carrancismo, cfr. Carlos Macías Richard (1994), *La fuerza del destino. Una biografía de Plutarco Elías Calles*. Tesis de doctorado, El Colegio de México.

sante por varias razones: porque hay poca información en el periodo de estos procesos, porque fue absorbida por la mayor organización financiera de la época (el Nacional de México), porque en su creación participó el Nacional para ampliar su cartera con antiguos clientes ligados a la incipiente bolsa de valores del porfiriato, porque otro móvil de su creación fue realizar operaciones que los bancos no podían efectuar por estar sometidos a las reglas de la incautación y porque la depreciación de sus activos estuvo, aunque sólo fuese de manera indirecta, relacionada con las dificultades de refinanciamiento que sufrieron los intermediarios financieros al comienzo de los años veinte.

La Compañía Bancaria Mexicana surgió de manera formal en enero de 1920 bajo la iniciativa de Guillermo Brockman, quien antes de la incursión carrancista a la ciudad de México ya tenía una reconocida carrera como agente financiero entre los *corredores* de la bolsa porfiriana de valores³³¹ y quien, para el final de 1919, había logrado reunir a un grupo de importantes inversionistas y agudos conocedores de la banca mexicana toda vez que habían participado en ella desde el porfiriato, entre los que se contaban Mariano Alegre, José Signoret, Adolfo Prieto, Baltasar Márquez, Alfredo Main, Hugh Rose, Miguel Macedo, Luis Elguero, Agustín Legorreta, Alberto González Montalvo y Luis Riba y Cervantes.³³² Brockman los pensó como “un grupo de amigos... capaz de defenderse bien y luchar con éxito”; de igual manera creyó que el equilibrio de nacionalidades sería benéfico para la nueva organización que reunía seis mexicanos (los que son nombrados al final), dos franceses (nombrados al principio), seguidos por dos españoles y dos “angloamericanos”.

Además de los nombres y las nacionalidades se podría hacer una suma de acciones que nos puede dar una idea de los intereses que se daban cita en el consejo de administración de la Compañía Bancaria Mexicana. Con 1,500 de las 7,000 acciones originales, Legorreta era el socio mayoritario, pero si se sumaran las 2,000 acciones que representaban Elguero, Signoret, Alegre y Prieto se podría concluir que al menos la mitad de los activos estaban íntimamente vinculados con

³³¹ Sobre su temprana participación como *corredor* en la bolsa de valores que se gestó centralmente para comerciar con valores mineros, véase Lagunilla Iñarrítú, *op. cit.*

³³² En este plano sobresalían Miguel Macedo, Luis Elguero y Luis Riba, destacados hombres de negocios porfirianos que gozaban de la amistad de Limantour. Como abogado de compañías constructoras de grandes obras, *e.g.*, las del Puerto de Manzanillo, de la Cía. del Ferrocarril de Veracruz al Istmo, de la Mexicana de Aceros y Productos Químicos, de la Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, Luis Riba informaba cotidianamente de los avances de sus operaciones a Limantour; su amistad se prolongaría en el exilio del ministro, cuando Riba fungió como uno de sus representantes en la capital mexicana. Limantour y Riba usaron los servicios de Brockman para transferencias de dinero, *cfr.* Limantour a licenciados Salvador Cancino y Luis Riba, 24 de marzo de 1914, en CEH, CDLIV, rollo 65. Prieto integró la Comisión Monetaria durante el gobierno interino de Francisco León de la Barra, *cfr.* carta de H. Scherer a Limantour del 8 de julio de 1911, *ibidem.*, rollo 72.

hombres de negocios que participaban también en el consejo directivo del Banco Nacional de México.³³³ En abril de 1920 la distribución se modificó y esto trajo como consecuencia que Miguel Macedo, así como el propio Banco Nacional de México fueran reconocidos como accionistas de la Compañía Bancaria Mexicana. El cambio, que había sucedido gracias a la venta de 550 acciones de Legorreta, así como de 25 acciones del resto de los miembros del consejo, traía como consecuencia el crecimiento de la proporción de acciones que hoy nos resulta asociable con el Banco Nacional de México.³³⁴ Entre esa fecha y el cierre de sus operaciones en mayo de 1923, la misma proporción crecería aunque no de manera pronunciada en favor de esta última organización. No obstante se puede deducir sin exageración que desde aquel entonces, el control estaría inspirado en el liderazgo del Nacional de México.

El presidente de la Compañía Bancaria Mexicana, don Guillermo Brockman, buscó restablecer nexos con sus antiguos clientes y dar cauce a las operaciones de sus socios “angloamericanos”, quienes representaban intereses mineros y ferroviarios como El Oro Mining & Railway Co. y Santa Gertrudis. Esta inclinación del giro parecía ser la natural puesto que Brockman conocía el mercado financiero mexicano precisamente desde su actividad en la Bolsa de Valores, y ésta se había caracterizado, fundamentalmente, por comerciar con valores y bonos de sociedades dedicadas a la explotación minera. Brockman había trabajado con éxito hasta antes de la crisis bancaria que trajo el huertismo y la mayor actividad revolucionaria; pero, como muchos otros empresarios de la época sus negocios declinaron y posteriormente abandonó el país, a su decir, “con motivo de la lista negra americana en fines de 1917 y primer semestre de 1918”.³³⁵

Naturalmente, su salida del mercado le motivó quebranto de fortuna, salud y tiempo que en 1920 quería “resarcir trabajando con nuevas energías”. Su correspondencia nos permite entrever sus temas interés al inicio de ese año, en el que comentaba a su antiguo jefe, don Hugo Scherer: “no necesito decir a usted que la nueva institución, de la cual han tenido la bondad dichos amigos de nombrarme presidente, desea renovar y continuar las relaciones con la clientela de mi Casa y seguramente tendremos mucha satisfacción si a usted personalmente le podemos servir en alguna forma”. En julio de 1913, poco antes de salir a Londres, Scherer

³³³No añadimos en esta suma el nombre de Miguel Macedo pues este personaje aparece en el Acta Constitutiva de la Compañía como representante de Baltasar Márquez y a su vez, este personaje no aparecería como miembro del Consejo del Banco Nacional de México sino hasta 1924; es decir, sólo después de la compra de la citada Compañía por el Nacional de México. Al respecto véase dicha Acta en “Documentos Comprobantes de la Compañía Bancaria Mexicana, Mayo de 1923. Instrucciones diversas sobre los documentos que nos ha entregado”. AHB.

³³⁴Cfr. respuestas de los consejeros a Brockman en *idem*.

³³⁵Cfr. carta de G. Brockman a Hugo Scherer del 13 de enero de 1920, en *idem*.

había traspasado a Brockman los derechos de su casa bancaria para que la operara “bajo su propio nombre”,³³⁶ Siete años después, con el ánimo de abrir varias puertas de un mismo tirón, Brockman agregaba:

Escribí hace algunas semanas a los señores Lazard Brothers & Co., de Londres, ofreciéndoles una parte del movimiento que tengamos en Londres; pero hasta la fecha no he recibido contestación; ignoro si estos señores tienen alguna predisposición conectada con las quejas que usted ha expresado de mi Casa, pero quiero creer que éste no será motivo.³³⁷

La recuperación y posterior ampliación de su antigua cartera de clientes era un objeto evidente para Brockman como para sus nuevos socios del Banco Nacional de México. No obstante su entusiasmo, lo cierto era que la Compañía Bancaria Mexicana nacía en un momento de ajuste continuo para el sistema financiero privado y de gran fragilidad para las finanzas públicas. En tres años de gestión eso se haría evidente.

Para el final de abril de 1923 en otra más de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración del Banco Nacional de México, presidida por José Castelló, se hizo referencia a un “asunto ya tratado con los señores consejeros”, éste concernía precisamente a la adquisición “del activo de la Compañía Bancaria Mexicana, S.A.”, así como a la decisión “de tomar a su cargo el pasivo, en vista de las dificultades que para su marcha ha encontrado dicha compañía, en la que desde un principio, ha estado directamente interesado el Banco”.³³⁸ No había pues sorpresa ninguna en torno al desenvolvimiento de esa empresa ni en relación con las decisiones de los consejeros del Nacional de México, pues ellos habían “celebrado algunas conferencias con los representantes nombrados” de la citada casa bancaria. Tampoco existía improvisación por el aspecto de la experiencia en el tema de las integraciones bancarias, por ejemplo, de Castelló –quien sustituía en funciones a Legorreta– se puede decir que sus habilidades en esos menesteres le

³³⁶Véase copia del contrato celebrado entre Hugo Scherer Jr., representado por el señor Ernesto Schroeder y Brockman, en CEH, CDLIV, rollo 72.

³³⁷Cfr. Brockman a H. Scherer del 13 de enero de 1920, *op. cit.* No está de más anotar que la Casa Scherer Jr., tenía entre otros socios a Julio Mathurin Limantour, hermano del ministro de Hacienda y que él y Scherer eran también socios del Banco Nacional de México; cfr. Antonio Manero (1915), *Qué es la revolución. Breve exposición sobre las principales causas de la Revolución constitucionalista en México*. H. Veracruz, Tipografía “La Heroica”. Sin duda, Scherer fue uno de los exponentes más puros del denominado grupo “científico” durante el porfiriato. Su trato directo con José Yves Limantour y su amistad íntima con Roberto Núñez, subsecretario de Hacienda, operador político del “grupo” y hombre de todas las confianzas del anterior, se revelan, por ejemplo, en el hecho de que Scherer fuera apoderado, junto con el ministro, de los intereses bancarios de Núñez ante la agencia financiera estadounidense Lazard Freres; cfr. carta de Josefina P. de Núñez Ortega a J.Y. Limanour del 12 de julio de 1913, CEH, CDLIV, rollo 71.

³³⁸Cfr. Libro 9, Actas de Consejo del BNM, AHB; sesión del 25 de abril de 1923.

fueron reconocidas ampliamente desde el porfiriato, pues las llevó a cabo con pericia y probada discreción.³³⁹ Y si algo pudo ser sujeto de polémica en aquella sesión, sólo el correcto examen del valor efectivo y por qué no decirlo, también del valor presente de sus acciones. Nominalmente éstas deberían costar 50 pesos, pero aquel día los accionistas del Nacional acordaron que negociarían con los representantes de la Compañía Bancaria Mexicana para pagarlas en 20 pesos y para alcanzar tales objetivos facultaron a la dirección arreglar el traspaso.

Unos días después, al comenzar mayo, Castelló informó del “traspaso del activo y del pasivo” de la Compañía Bancaria Mexicana señalando que sus acciones habían sido compradas en 22.50 pesos. La operación se había redondeado en una cifra ligeramente superior a la ideal para los consejeros del Nacional de México; sin embargo, anteriores exámenes de las cuentas de depósito y, en general de la clientela, los satisficieron y adelantaron la operación cubriendo la diferencia. No está de más mencionarlo, significativamente ese día el Consejo decidió otra magnífica operación. Por 80,000 pesos en efectivo, otro banco, el de Londres y México, entregó al Nacional el control de la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora de Chapala, S.A., empresa sucesora de aquella otra de nombre parecido en la que durante el porfiriato el Banco Central había invertido varios millones de pesos oro y que ahora venía nuevamente por sus fueros a explotar una de las ramas más prometedoras de la economía al inicio de los años veinte.³⁴⁰ En la operación se negociaban medio millón de pesos en bonos de la Hidroeléctrica, sin embargo, por recomendación telegráfica de Legorreta al resto de los consejeros del Nacional, estos valores no debían de adquirirse a una suma mayor de 300,000 pesos

³³⁹El caso más representativo tratado por él fue la fusión de los antiguos bancos de emisión de Yucatán que dieron lugar al peninsular mexicano durante la crisis de 1907. En uno, el Yucateco, tenían intereses el Banco Central, la iglesia yucateca y una fracción de la oligarquía yucateca encabezada por Rodolfo Cantón y Olegario Molina, ministro de Fomento de Porfirio Díaz y connotado terrateniente yucateco, mientras que el otro, el Peninsular, estaba más ligado al Nacional de México. Como vimos antes, la competencia del Central y el Nacional implicaba problemas delicados al gobierno de Díaz. Por esto, Limantour vigiló atentamente la fusión. Castelló, tío de Carmen Romero Rubio (esposa de Díaz), fue el encargado de sacar adelante la operación que se valoró como “todo un éxito” no obstante registrar un *pequeño* desfalco de 800,000 pesos, causado por el cajero y miembros de la *casta divina*. Ciertamente, se logró el rescate de algunas sumas aprehendiendo a delincuentes de *guayabera* blanca, pero el “verdadero saneamiento” financiero vino con la intervención de la Secretaría de Hacienda. Información adicional del caso y de otro muy parecido, aunque distinto en monto (menor) y en escándalo público (mayor), el del Banco Minero de Chihuahua, véase Jacinto Barrera Bassols (1997), *El caso Villavicencio. Poder y violencia en el porfiriato*. México, Extra Alfaguara. Sobre los *sagrados* orígenes del Banco Yucateco, véase Hernán Menéndez Rodríguez (1995), “La alianza Clero-Molina o el resurgimiento económico de la Iglesia en Yucatán”, en Othón Baños Ramírez (comp.), *Liberalismo, actores y política en Yucatán*. Mérida, Yuc., Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán.

³⁴⁰Sobre los orígenes de la Compañía y algunos momentos oscuros de dos de sus primeras ventas, véase CEH, MVC, doc. 6703.

oro nacional. Desde luego, Legorreta recomendó que se presionara para obtener una rebaja sustancial. Castelló finalmente la negoció en 260,000 pesos; es decir, casi al 50 por ciento de su valor. Pero eso no era todo, obligaciones anteriores del Banco de Londres para con el Nacional, hicieron que la operación se reflejara como un abono de 180,000 pesos sobre los mencionados adeudos, por lo que en el negocio sólo se movilizaron “80,000 pesos en efectivo”. Es muy probable que los consejeros del Nacional de México hayan celebrado las dos espléndidas operaciones de ese comienzo de mayo con un trago de whiskey. No estaba de más, en un solo día habían adquirido el control de dos compañías pagando entre el 45 y 55 por ciento de sus valores nominales respectivos. Con la compra de “pesos a tostón” se puede entrever la recuperación mostrada por la liquidez del Nacional (cuyos activos parecían revaluarse) durante los últimos tres años. Además, como podemos observar, su liquidez tenía un valor especial en el alicaído mercado mexicano. La diversificación de sus intereses le permitía absorber empresas susceptibles de ser saneadas en un plazo corto. Sobre este respecto, una prueba nos la ofrece la propia reacción del Consejo de Administración frente a las comunicaciones de Legorreta, pues él pidió la opinión de los consejeros “sobre la conveniencia de vender sus bonos de la Compañía Hidroeléctrica... al 50 por ciento de su valor nominal”; ante tal planteamiento, los consejeros no vacilaron en contestar negativamente subrayando el “hecho de que la Compañía se encuentra al corriente en el servicio y amortización de estos bonos”.³⁴¹ En consecuencia, su situación, como sucedía con la cartera de la Compañía Bancaria Mexicana, convertía a la Hidroeléctrica en una adquisición recomendable. Así, la crisis financiera por la que atravesaron empresas y algunos intermediarios financieros de pequeño y mediano rango se acompañaba también de un crecimiento de los negocios del Banco Nacional; se acompañaba de un fenómeno de centralización de capitales.

De tratados y rebeliones

Al igual que para el gobierno de Carranza, para el de Obregón el reconocimiento internacional fue un asunto crucial. Sin embargo, Obregón pudo abordarlo de manera distinta gracias al cambio en el escenario internacional que acompañó el fin de la guerra europea, a la “unificación” de los revolucionarios y a una relación diferente con los Estados Unidos.

El nuevo consenso político parecía tocar también a la banca. Al punto que mayo de 1923 parecía traer mejores tiempos para el improvisado “banquero de

³⁴¹ Cfr. Libro 9, Actas de Consejo del BNM, AHB; sesión ordinaria del 2 de mayo de 1923.

los bancos” mexicanos, el Nacional de México, y reforzar su posición (al menos económica) para defender la función que le asignaron su esplendor porfiriano, el inestable mercado y los descabros del sistema financiero revolucionario. Desde hacía por lo menos dos años, los miembros europeos del Comité Internacional de Banqueros, su presidente estadounidense, Thomas Lamont, así como funcionarios del más alto nivel en Washington insinuaban a Obregón y a su ministro de Hacienda la pertinencia de convertir al Nacional de México en un Banco Central. Era la estructura institucional que mejor podía servir para un propósito en el que todavía no existía una posición totalmente definida entre el gobierno y el Comité. Desde luego, habría que hacer modificaciones para que su cartera reflejara de mejor modo los intereses de otros países en México, pues todavía en esa fecha, los capitales de esa organización eran predominantemente europeos y preferentemente franceses. El proyecto involucraba entonces la internacionalización del Nacional admitiendo representantes estadounidenses, ingleses y, naturalmente, a funcionarios del gobierno mexicano. Este plan pudo ser visto con recelo por el gobierno de Obregón, pero sin los fondos necesarios para dar realidad a sus proyectos estatales alternativos poco podía hacer más allá del papel y de las declaraciones. Además, era impolítico e inoportuno rechazar las propuestas del Comité. Podría entonces decirse que ese verano todavía fue esperanzador para el Banco Nacional pues las dificultades gubernamentales para conseguir fondos en el mercado internacional convertían a sus espontáneas funciones, a su experiencia y a la promoción que recibía desde el exterior, en valores estratégicos para negociar una posición de privilegio en la reconstrucción económica del país.

Sin embargo las circunstancias políticas estropearon esta coyuntura. En ese verano se agudizaron los cismas presentes al interior del gobierno obregonista y para diciembre una nueva rebelión, la delahuertista, acendró la inestabilidad que postergaría el anhelo reconstructivo al tiempo que facilitó el surgimiento de voces reclamando una política económica de corte proteccionista, así como la decisión de reforzar la soberanía financiera formando una banca central regulada por el Estado.³⁴² Se abandonarían así los proyectos de la banca internacional en los que se señalaba al Banco Nacional de México como el candidato ideal para constituir una banca central con participación estatal y dirección privada mayoritaria.

³⁴²Detalles sobre esta fundación en Emilio Zebadúa (1994), *Banqueros y revolucionarios: la soberanía financiera de México, 1914-1929*. México, Fondo de Cultura Económica. Véase también Eduardo Turrent Díaz (1982), *Historia del Banco de México*. México, Banco de México.

Desde luego, no se puede ofrecer una explicación unívoca de las causas que motivaron este paso hacia la *reorientación de los propósitos de la economía* en materia de regulación monetaria y bancaria, en principio porque se trató, en gran medida, de un proceso inintencional o no dirigido por proyectos políticos específicos (por lo menos hasta antes que diera su giro más significativo durante el gobierno de Obregón, formalizado al final de junio de 1924 con el decreto de suspensión de pagos de la deuda acordada en el Tratado Lamont-De la Huerta). Cabe resaltar que entre los detonadores del cambio estuvieron las consecuencias de la rebelión delahuertista y ésta no puede dissociarse de los llamados Tratados de Bucareli.³⁴³

Además del carácter decisivo de los acontecimientos políticos también, en perspectiva diplomática, se puede observar que por espacio de un siglo los Estados Unidos usaron la carta del reconocimiento como un poderoso mecanismo de presión hacia México. Se trató de un ciclo que se abrió con el problema de Texas y la invasión estadounidense de 1846 y que no se cerró sino hasta el ingreso de México a la denominada Segunda Guerra Mundial. Desde un ángulo amplio tampoco sorprende que, como había sucedido con la mayoría de los convenios celebrados entre los gobiernos mexicanos y estadounidenses del siglo XIX (el de la Mesilla, el Guadalupe Hidalgo, o el Mac Lane-Ocampo, etcétera), también los denominados Tratados de Bucareli constituyeran un mito ancestral en el abigarrado imaginario histórico de la Revolución mexicana. Y no es para menos, pues además de nutrirse de gruesas raíces históricas, en su tiempo el *encuentro* concentró el interés de políticos mexicanos, estadounidenses y europeos, amén de producir una cauda de asesinatos de personajes relevantes, una amplia alianza de políticos antiobregonistas y la primera división importante entre los caudillos sonorenses que habían derrocado a Carranza. Esta división alimentó los motivos de la desorganizada rebelión militar que encontró en Adolfo de la Huerta, ex secretario de Hacienda de Obregón, a una de sus cabezas más visibles, en buena medida por el clima de tensión y acusaciones que existía entre ambos personajes.

En un tono que recordaba las sospechas que Villa dirigió sobre Carranza al final de 1915 (la acusación de renunciar a la soberanía por el reconocimiento estadounidense), De la Huerta alzó su voz contra el júbilo con el que Obregón celebró el reconocimiento estadounidense en su informe presidencial del 10. de septiembre de 1923. Al igual que Villa, De la Huerta alentó la creencia de que tras los Tratados de Bucareli existían pactos ocultos que privilegiaban

³⁴³Tal es el nombre de los encuentros de los representantes de los presidentes Harding y Obregón (mayo de 1923), en la casona número 85 de Bucareli, con el propósito de reanudar las relaciones de ambos países y modificar algunos puntos del *Tratado Lamont-De la Huerta*.

intereses extranjeros.³⁴⁴ Las acusaciones no ocurrían en el vacío pues caían al lado de una serie paralela de acontecimientos que alentaban la generalización de las sospechas.

Un aliento vino de las circunstancias que rodearon el asesinato de Villa, pues éste tensó la relación entre De la Huerta y Obregón. Su homicidio causó sospechas por la impunidad que gozaron sus ejecutores. Muchos indicios “extraños” permiten sustentar la tesis de la existencia de un complot dirigido desde las más altas esferas del Estado como explicación de la masacre en la que también murieron su leal lugarteniente Miguel Trillo y cuatro de sus *dorados* guardaespaldas.³⁴⁵ No fue casual que el asesinato del famoso guerrillero coincidiera con el rejuogo de dos competencias electorales: la primera de carácter local por la gubernatura de Durango; en la que desde hacía unos años se registraban manifestaciones en su apoyo,³⁴⁶ mismas que eran causa del malestar de Jesús Agustín Castro, el gobernador duranguense y de inquietud entre Obregón y Calles, quienes por razones distintas no veían con buenos ojos el renacimiento político del Centauro del Norte. Éste se ligaba a un segundo nivel (propiamente nacional) de competencia, donde se jugaba la Presidencia de la República. Un nivel en el que Villa había mostrado inclinaciones hacia De la Huerta, con quien había pactado su pacificación pese al rechazo de Obregón. Desde luego, el presidente también tenía algún conocimiento de los estados financieros de Villa, por ejemplo, a través del gerente general de la Comisión Monetaria, Santa Ana Almada y de Arturo Celis Ilzarbe, gerente de la sucursal Torreón de esa Comisión.³⁴⁷

Desde luego, Obregón no veía con buenos ojos el posible ascenso de su antiguo enemigo, o, ¿era posible que le permitiera conquistar la fuerza legal de una gu-

³⁴⁴Seguidores y simpatizantes repitieron esa versión. Al respecto véase Vito Alessio Robles (1993), *El anti-reeleccionismo como afán libertario de México*. México, Porrúa.

³⁴⁵Como la injustificable e inesperada ausencia de la guarnición de Parral cuyo jefe, Félix Lara, aparentaba estimar a Villa; la cínica impunidad de sus ejecutores; las dilaciones y poca energía mostrada por Obregón para investigar el crimen, para informar del mismo a sus seguidores en Canutillo, en contraste con la agilidad con que ordenó sitiarlos. Se trató de un complot, pero, ¿quién lo ordenó? Friedrich Katz (1998), *Pancho Villa*. México, Era. t. 2, pp. 361 y ss., evidencia que “Calles tenía, en ese momento, todos los motivos tradicionales para un asesinato político mexicano”, aunque para él tampoco “las protestas de inocencia de Obregón... (son) convincentes”.

³⁴⁶*e.g.*, José Orozco a Obregón, 5 de noviembre de 1921, AGN, AOC, exp. 428-S. Orozco quien editaba *Portavoz*. *El periódico de la Laguna* y era corresponsal de *El Universal*, informaba a la Presidencia de los encuentros de Villa con grupos representativos de la sociedad local.

³⁴⁷Villa canalizó varios de sus negocios con la Comisión, una de sus operaciones ascendió a la respetable suma de 100,000 dólares, al respecto, cfr. carta de Celis a Villa del 21 de noviembre de 1922, colección particular Gerardo García Gómez, que incluye correspondencia complementaria de octubre-noviembre, en relación con los negocios de Villa y la importante Compañía Jabonera de la Laguna (copias fotostáticas obran en poder del que suscribe).

bernatura? Paralelamente, renacían las suspicacias en torno a la relación de Villa con su ministro de Hacienda, después de todo, durante su interinato presidencial, De la Huerta negoció sin consultar a Obregón y después de consultarlo, continuó, sin agraviarse por su desacuerdo, con la rendición del Centauro del Norte.³⁴⁸ Vínculos, alianzas, intrigas pero todavía más sospechas quedaron abiertas aquella mañana del 20 de julio de 1923, en Parral, Chihuahua, con el asesinato del legendario Pancho Villa.³⁴⁹

Además del asesinato de Villa, el conflicto poselectoral suscitado entre Jorge Prieto Laurens y Aurelio Manrique por la gubernatura potosina también dividió a los caudillos sonorenses. En él se reflejaban de manera simultánea los problemas internos del gabinete obregonista con motivo de la competencia por la candidatura “oficial” a la Presidencia de la República y los que concernían a la relación entre De la Huerta y una importante fracción del Congreso. Personaje ambicioso e inteligente, Prieto Laurens, un antiguo líder estudiantil que veía ascender su estrella en el escenario nacional como presidente de la Cámara de Diputados y del Ayuntamiento de la ciudad de México, era también uno de los líderes del Partido Nacional Cooperatista. Una organización política de gran influencia en los primeros tres años del obregonato y que fue asediada por los obregonistas durante la competencia presidencial de 1923 hasta conducirla a su fragmentación y subsecuente irrelevancia. Su independencia cuestionaba la anhelada *unidad* revolucionaria y el deseo de alcanzar la disciplina de los partidos aliados. Los cooperatistas se dividieron entre los que apoyaban a Calles y los que pugnaban por De la Huerta. A decir de Juan Manuel Álvarez del Castillo, el propio Prieto se inclinó inicialmente por Calles para corregir después su preferencia.³⁵⁰ Así, Prieto dedicaba, al final de agosto, buena parte de su tiempo para estrechar su cercanía con De la Huerta lo que hizo junto a Martín Luis Guzmán, Carlos Argüelles, Gustavo Arce, Roque González Garza, Roberto Casas Alatríste y Álvarez del Castillo, entre otros.

³⁴⁸ Cfr. Katz (1998), *op. cit.*, pp. 315 y ss.

³⁴⁹ Entre los obregonistas que justificaron las “infidencias” de Obregón con Carranza y, en sentido contrario, denostaron las cometidas por De la Huerta contra Obregón, traslucen inquietudes por la alianza de Villa y De la Huerta. Así, se subrayó que “el villismo había muerto antes que Villa” y que “desde el punto de vista político Salas Barraza, mató a un muerto”. Afirmación cuestionable, *e.g.*, la campaña política de Villa en Durango podría refutarlo, cfr. Gonzalo de la Parra (1924), *La lepra nacional. Leves perfiles de los hombres pequeños y malvados últimamente descubiertos. Apuntes para la historia de la guerra civil más impopular de México (octubre-diciembre de 1923)*. Chihuahua, edición del autor (BMLT, núm. de inv. 51935). En contraste este obregonista chihuahuense reconocía que “desde el punto de vista de seguridad” de Chihuahua y de la República se había asesinado al único guerrillero capaz de organizar rápidamente un nuevo núcleo rebelde.

³⁵⁰ Cfr. Juan Manuel Álvarez del Castillo, (1960), *Memorias*. Guadalajara, Jalisco. Talleres del Instituto Tecnológico de la Universidad de Guadalajara.

En marzo de 1923, Prieto Laurens dio un paso que posteriormente mostraría ser equivocado. A través del diputado Gabriel Martínez sondeó los ánimos del cacique potosino Saturnino Cedillo en torno a la posibilidad de apoyar su candidatura. El diputado llevaba una carta de presentación que Prieto obtuvo de Calles; aparentemente esa carta fue el pretexto para comentarle a Cedillo que Calles veía con buenos ojos la candidatura de Prieto. Intuitivo, el cacique sospechó de los dichos del diputado y escribió a “Cholita” González, la aguda e insustituible secretaria de Calles, quien se apresuró a contestarle que dicha carta se había tramitado por su conducto “con objeto de tratar asunto enteramente particular... pues la conducta que se ha trazado el señor general [Calles], es la de no presentar ninguna clase de ayuda a personas que figuren como candidatos para cualquier puesto de elección popular, para que el triunfo sea de quien lo obtenga”.³⁵¹ La instrucción era clara aunque se expresara en el lenguaje de los revolucionarios mexicanos; Calles no apoyaba manifiestamente a ninguno de ambos y el triunfo sería de quien lo “obtuviera”, por supuesto, Cedillo conocía los medios bajo los que transcurría su obtención.³⁵²

Por su parte Manrique era señalado como un político más radical y cercano a Obregón y a Elías Calles.³⁵³ Imagen que parecía explicarse por su liderazgo en el partido Agrarista y amistad con el encendido orador Antonio Díaz Soto y Gama. Manrique gozaba de una clientela política propia por más que entre sus correligionarios se observara un mayor apego al obregonismo. Además contaba con el apoyo del Partido Laborista que encabezaba Luis N. Morones y con la fracción obregonista-callista de los cooperatistas en la que destacaban personajes que ocuparían carteras ministeriales en el gabinete de Calles como José Manuel Puig Casauranc, Luis L. León, Romeo Ortega, Ezequiel Padilla, así como un futuro presidente: Emilio Portes Gil.

Como fue normal en esos años de reinstitucionalización (y aun después), ambos candidatos reclamaron su propio triunfo. Pero Obregón no mostró incli-

³⁵¹ Cfr. Cedillo a Calles y a S. González, 22 de marzo de 1923, así como la respuesta de ella a Cedillo del 28 de ese mes, en Carlos Macías (1993), *Plutarco Elías Calles. Correspondencia personal 1919-1945*. México, Fondo de Cultura Económica, Instituto Sonorense de Cultura, Gobierno del Estado de Sonora, Archivo Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, t. II.

³⁵² Mientras eso ocurría, Prieto se inclinaba, a decir de los callistas, a buscar el apoyo del clero y la elite potosina, cfr. *Entrevista con el ingeniero Luis L. León, realizada por Alicia Olvera de B. los días 23 y 29 de marzo de 1973*. Archivo Sonoro, Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora, México (1973). Sobre sus convicciones religiosas, *Entrevista con el licenciado Jorge Prieto Laurens, realizada por María Ann Kelly, el 11 de julio de 1972*, en *ibidem* (1981).

³⁵³ Manrique desafió públicamente con el grito de “farsante” a Calles durante los funerales de Obregón, de lo que podría desprenderse que su relación con él no era la de un incondicional, cfr. Carlos Macías Richard (1994), *La fuerza del destino. Una biografía de Plutarco Elías Calles*. Tesis de Doctorado, El Colegio de México.

nación inmediata hacia Manrique, el candidato más afín con sus proyectos, sino que solicitó al Senado la desaparición de los poderes en San Luis Potosí interponiendo la revisión legal de la competencia al avance de los cooperatistas. Fue en medio de esta coyuntura y de la polémica generada en las cámaras y la Suprema Corte de Justicia, cuando muchos políticos y militares que no veían con simpatía el ascenso de Calles alentaron la candidatura presidencial de don Adolfo de la Huerta. La proposición era más antigua y se entrelazó con la tensión que trajo la eliminación de Villa y, claro, De la Huerta señalaría que entre el paso de su renuncia y la aceptación de su candidatura había ponderado el atropello a la soberanía de San Luis Potosí.³⁵⁴ Después añadió que varios intentos de asesinato no le dejaban otra opción que la de protegerse bajo la investidura de candidato a la presidencia, la que adquirió el 19 de octubre de 1923. Y, desde luego, tuvo cuidado de no mencionar ningún vínculo con Villa. En contraste criticó los Tratados de Bucareli; afirmando, la existencia de pactos extraoficiales, y la formación de una comisión mixta de reclamaciones que redundaría en pérdida de soberanía para el país.

Plutarco Elías Calles previó los efectos de la competencia presidencial y desde marzo sostuvo reuniones con De la Huerta; varios eran los objetivos que las podrían justificar: sondear sus intereses reales como posible candidato, intercambiar ideas sobre las alternativas para el país dado el predominio obregonista; construir soluciones a la engorrosa competencia en la que ya los envolvían sus seguidores, etcétera. Una solución buena debía ser múltiple. Debía garantizar —a pesar de las diferencias presentes en sus clientelas políticas— la hegemonía de ese círculo íntimo que durante la época se conoció como el *triángulo sonoreense*, también, en la medida de lo posible, debía cuidar su propia relación personal y, por supuesto, debía vigilar la política financiera que encabezaba Obregón, pues crear situaciones de conflicto podía hacer peligrar la aún no bien consolidada hegemonía de los revolucionarios norteros. Sin embargo, las tensiones existentes precipita-

³⁵⁴Con las reservas del caso, los comentarios de Álvarez del Castillo (1960: 210 y ss) resultan sugerentes. Después de haber ocupado la legación mexicana en Alemania, Álvarez conoció la opinión de De la Huerta: “Álvaro y yo nos hemos distanciado a muerte. Háceme hecho blanco de una serie de burdas inconsecuencias. En principio pensé que podría inclinar la opinión pública en favor de Plutarco; pero el fracaso fue total. El pueblo le rechaza. De todos los estados recibo requerimientos de aceptar la candidatura presidencial.” De la Huerta habría dicho que fue “la torpe decisión del gobierno del centro en el caso electoral”. Sin embargo, su dicho resulta ser una reducción del conflicto, en el que, por cierto, De la Huerta aparece como el defensor de una causa justa y no de un político de pocos escrúpulos; en el que no traslucen sus aspiraciones presidenciales sino —cierta o no— una gran antipatía popular hacia su competidor. Sobre las diferencias de De la Huerta en el caso potosino véase también la carta de Plutarco Elías Calles al Presidente de la República del 26 de septiembre de 1923 en ACT, Fondo Fernando Torreblanca, serie 10213, inv. 1069, exp. 2, gav. 44.

ron, al final de septiembre de 1923, el rompimiento de Adolfo de la Huerta. Calles se enteró pronto de la aceptación de su candidatura gracias a su correspondencia directa y de inmediato le recordó la corresponsabilidad que los obligaba con Obregón. Por su carácter de altos funcionarios, le pidió serenidad y el retiro de su renuncia; a cambio anotó: “Tal vez es un sacrificio que te pido, pero te autorizo para que a tu vez me pidas el que tú quieras y estará concedértelo.”³⁵⁵

Es plausible que el ofrecimiento tuviese lugar, pero también parece cierto que De la Huerta no compartió la promesa pensando quizá que sólo significaba posiciones en el nuevo gabinete. El resultado fue que no negoció con oportunidad la oferta de Calles ante Obregón quien ya lo consideraba “desembonado del núcleo revolucionario”.³⁵⁶ Los acontecimientos se precipitaron con rapidez. El “agujiro” del que se quejó en su correspondencia menudeó; una campaña de descrédito público encabezada por su antiguo rival y nuevo ministro de Hacienda, Alberto J. Pani y que gozaba de la anuencia de Obregón alentó aún más la polarización política. Bajo este escenario de división política y de aparente frustración de los arreglos ensayados por Calles, las circunstancias parecieron inclinarse en favor de las herencias y continuidades del grupo obregonista.

Las negociaciones obregonistas

Además de miedos recíprocos, rencores políticos, disputas electorales e intereses económicos, la ruptura de la elite revolucionaria estuvo condicionada por la negociación de la deuda. Pero esto no era claro hacia el verano de 1922 cuando aún lucía alentadora la gestión hacendaria de Adolfo de la Huerta. Y lo era no sólo para la parte mexicana pues, pese a las dificultades de las negociaciones (que duraron más de un año), en Nueva York el acuerdo también era visto como una buena opción. El juicio externo ponderaba la evolución de las circunstancias político militares bajo las que Obregón había alcanzado la Presidencia y las dudas que existieron sobre la estabilidad de su gobierno. Dudas que comenzaron a despejarse con la visita de William Wiseman, banquero vinculado al Banco de París y los Países Bajos, y Vicent Yorke, presidente de la Mexican Railway Ltd., quienes radicaron en México al inicio de 1921 y elaboraron informes sobre la reactivación económica mexicana y la pertinencia de llegar a nuevos acuerdos políticos y

³⁵⁵Luis L. León (1987), *Crónica del poder. En los recuerdos de un político en el México revolucionario*. México, Fondo de Cultura Económica, interpretó que la declaración significaba que Calles sacrificaría su candidatura para “sostener la unidad revolucionaria”, pp. 153 y ss.

³⁵⁶Cfr. carta de Obregón a Calles del 27 de septiembre de 1923 en ACT, FFT, serie 10213, inv. 1069, exp. 2. Obregón instruyó a Pani para rechazar el proyecto del Banco Único elaborado por De la Huerta, pues supondría cambiar el control de las finanzas nacionales “por un plato de lentejas”.

financieros. Posteriormente, para el final de ese año, el propio Thomas Lamont se animó para viajar a México y conocer directamente la situación.³⁵⁷

Obregón lo había invitado en febrero de 1921, pero antes de venir Lamont consultó al Departamento de Estado estadounidense, el que recomendó posponer su visita al parecer influido por Albert Fall y la todavía preponderante posición de las grandes compañías petroleras al comienzo de la administración Harding. La recomendación de Fall consideró inconveniente que los bancos estadounidenses entraran en negociaciones con las recién instaladas autoridades mexicanas sin que se alcanzara un acuerdo con Washington sobre el reconocimiento del gobierno mexicano. Por su parte, Obregón se preocupó por diseñar una salida alternativa al problema que se le planteaba pues entendía que Fall tenía demasiadas razones para mantener una posición dura.³⁵⁸ Por esto envió a Ignacio P. Gaxiola, hombre de toda su confianza, con la misión confidencial de entregar personalmente a Harding una carta en la que exponía la posición mexicana ante la “ingerencia obstruccionista” de las compañías petroleras y del Departamento de Estado ante el reconocimiento de su gobierno.³⁵⁹ En una entrevista posterior, el subsecretario Fletcher dijo a Gaxiola que el petróleo era un “detalle que poco afectaba la cuestión general” del entendimiento. Un punto más importante era que el reconocimiento del gobierno de Obregón implicaba el de la Constitución de Querétaro y que ésta no protegiera los “derechos adquiridos por ciudadanos americanos” especialmente en lo concerniente al artículo 27. Aunque Gaxiola debió regresar a Sonora³⁶⁰ pudo dejar en manos Manuel Vargas, el antiguo secretario particular de Obregón y ahora agente financiero mexicano en Nueva York, vigilar que el se-

³⁵⁷Para más detalles de la visita de Lamont en octubre de 1921 y los cambios de política exterior registrados con la presidencia de Harding, cfr. Stephen Bodayla (1987), *Financial Diplomacy. The U.S. and Mexico, 1919-1923*. Nueva York y Londres. Garland Publishing, Inc.

³⁵⁸Las razones incluían el intento de obtener provecho personal directo de su renuencia. Así el cónsul general de Ciudad Juárez, Chihuahua, Luis Montes de Oca informó a Obregón de un contacto con un representante del senador Fall en el que se le había ofrecido el retiro de sus informes sobre México en 1919 (los cuales eran contrarios al reconocimiento) y su influencia con senadores republicanos para obtener el anhelado reconocimiento estadounidense; trabajos por los que pedía 130,000 dólares; cfr. Telegrama de Luis Montes de Oca a Álvaro Obregón, del 13 de enero de 1921, ACT, FFT, serie 10201, Exp. 23-24, inv. 49, gav. 35.

³⁵⁹El 28 de marzo, John M. Rosseter presentó a Gaxiola con Harding quien le aseguró que discutiría el documento de Obregón con Fletcher. La tarde siguiente Gaxiola reiteró a Fletcher su carácter de emisario personal y le solicitó discreción. Fletcher contestó que no permitiría que “intereses personales de ningún grupo” influyeran en su ánimo. Gaxiola creyó que en su misión se había avanzado pero previno a Obregón de la vigilancia que le impusieron las compañías petroleras, *idem*.

³⁶⁰Como representante comercial de Obregón debía atender sus intereses en el río Petatlán. Obregón lo instruyó sobre la forma en la que debería conducirse con Mr. Richardson y “sólo podríamos esperar la resolución (de Mr. Richardson) si éste facilitaba 75,000 dólares para asegurar opciones”, *idem*; véase también telegrama de Gaxiola a Obregón del 18 de mayo de 1921 en ACT, FFT, serie 10201, exp. 23-24, inv. 49.

cretario de Estado estadounidense, Hughes, recibiera el mensaje tranquilizador de Obregón: no habría retroactividad en la aplicación del artículo 27.³⁶¹

Obregón tampoco descuidó a los banqueros y para junio volvió a presionar declarando que pese a su buena fe la propuesta de iniciar las negociaciones no había sido aceptada. La intensa actividad obregonista, la posibilidad de que los intereses petroleros crearan inestabilidad en México³⁶² y el interés por acabar con la moratoria *de facto* en la que había caído el servicio de la deuda mexicana fueron tres motivos importantes para que Lamont reaccionara frente a tales declaraciones e insistiera a la Casa Blanca sobre la necesidad de atender la propuesta obregonista. Desde Rochester, Plutarco Elías Calles informó a Obregón de la salida de Lamont y le recomendó que se le expusiera la situación financiera con “toda franqueza” pues iba con el empeño de no fracasar y con la misión de entregar a Hughes un informe para solucionar el problema del reconocimiento.³⁶³

Lamont había estrechado sus contactos con el Departamento de Estado estadounidense con objeto de que coincidieran sus políticas así que tan pronto como su misión fue aceptada por Hughes y Fletcher, afinó detalles y preparó su viaje a México. Lamont llegó el 5 de octubre e inmediatamente escuchó las propuestas de Adolfo de la Huerta. Una en particular causó su malestar. Consistía en que las compañías petroleras compraran bonos de la deuda mexicana para pagar los impuestos que adeudaban en México. Ésta implicaba un mensaje poco complaciente para el banquero pues los bonos se cotizaban muy por abajo de su valor nominal. Es muy probable que De la Huerta madurara su propuesta después de observar la agresiva reacción de los petroleros ante al Decreto del 7 de junio de 1921, donde se creaba un impuesto sobre la exportación de petróleo y donde traslucía la intención gubernamental de reanudar el servicio de la deuda pública con base en dicho ingreso. El impuesto obedecía a la imperiosa necesidad que tenía el gobierno de regularizar sus ingresos fiscales; la aún boyante industria petrolera le ofrecía esa posibilidad y simultáneamente ofrecía una garantía real de pago al momento de iniciar las negociaciones de la deuda.

Desde agosto Lamont había visto que la resolución del problema lo enfrentaba a las firmas petroleras quienes presionaban al gobierno mexicano para persuadirlo de rescindir el nuevo impuesto, supo por ejemplo que aquéllas revisaron la posibilidad de otorgarle un préstamo teniendo en mente ese objetivo. A Lamont

³⁶¹ Cfr. Vargas a Obregón, 14 de mayo de 1921, y respuesta de Obregón un día después en *idem*.

³⁶² Tal circunstancia hacía creíble la petición de Obregón al general Manuel Peláez para que regresase al país y lo orientara “para evitar toda posibilidad de conflicto que ellas mismas intentaren crear”, cfr. Obregón a Vargas, Nueva York, del 4 de julio de 1921, en *idem*.

³⁶³ Tel., Rochester, Minn., Plutarco Elías Calles a Obregón del 10. de octubre de 1921, en *idem*.

le inquietó esta posibilidad que inmediatamente reportó a Hughes y Fletcher quienes contuvieron los ánimos de los petroleros.³⁶⁴ Naturalmente, Lamont veía una pérdida económica significativa para el Comité pues los bonos se cotizaban alrededor del 40 por ciento de su valor facial y también pudo haber visto un factor de coacción, un techo por encima del cual no podría obtener sino dilaciones del gobierno mexicano y márgenes de recuperación menores; en tercer término, pudo apreciar que las autoridades mexicanas estaban dispuestas a impulsar una política conducente al enfrentamiento de banqueros y compañías petroleras.

A Lamont le preocupó que los petroleros mostraran simpatía por la propuesta delahuertista: era un ahorro para sus obligaciones fiscales. El funcionario de J.P. Morgan & Co., entendía que el asunto de la deuda mexicana podía realmente redundar en la polarización de los intereses de ambos grupos empresariales. Él podía insistir en la buena fe que había caracterizado la venta original de los bonos y asegurar que la calidad de las fianzas respectivas eran excelentes, pero lo cierto era que uno de los puntos más importantes de su negociación con De la Huerta se debilitaba y el precio de esos certificados se devaluaba. En consecuencia, el embajador de Wall Street podía estar modificando positivamente su idea general del país y de los alcances que se gestaban en nombre de la revolución,³⁶⁵ pero también pudo observar que el doble juego delahuertista lo obligaba a hacer un trabajo más fino en Washington, Europa y, por supuesto, con los petroleros (con quienes se reunió un par de semanas antes de llegar a México). Era claro que el ministro quería explorar un camino que le parecía ventajoso tanto para agilizar el pago de la deuda como para obstaculizar una posible alianza entre petroleros y banqueros. Pero cuando las discusiones abordaron el tema del empréstito Lamont mostró sus cartas: el Comité de Banqueros no podría ofrecer ningún

³⁶⁴Hughes escribió a Walter C. Teagle, presidente de Standard Oil New Jersey y figura influyente entre los petroleros, desaprobándolo por mezclar el tema de los préstamos y el de los impuestos al petróleo; cfr. Stephen Kane (1973), "Bankers and diplomats: The Diplomacy of the dollar in Mexico, 1921-1924", en *Business History Review*, vol. XLVII (3), Autumn.

³⁶⁵Antes de salir a México, Lamont declaró que negociaría la deuda mexicana sin tocar el tema de los préstamos, cfr. *idem*. Ante tenedores de bonos comentó que trataría con "bolcheviques usurpadores" y aunque su idea del "bolchevismo mexicano" parece haber cambiado, no ocurrió lo mismo con la opinión pública estadounidense; al respecto es ejemplar: Wilbur Bates, *An open letter to Mr. Thomas W. Lamont*. Nueva York, International Association for Advancement of Religious and Political Liberty, Inc., 10 de octubre de 1922, en CEH, CMLXXV, doc. 14494. Opinión interesante no sólo por exigir radicalidad a Lamont o reflejar la fragilidad que se atribuía al gobierno de Obregón en el imaginario estadounidense, sino también por ese intento de *comprender lo mexicano a través de lo ruso ¿o viceversa?*. A sus ojos México era un país "confesadamente bolchevique después de la adopción de la «Constitución de 1917»". Aunque los *rojos* de "abajo del río Bravo" eran diferentes y no sólo por su primacía como revolucionarios o porque los rusos no pudieron imaginar un *uso distinto al burgués* para los excelsos vinos del zar, cuando después de sus traerlos del Palacio de Invierno decidieron tirarlos al cauce del Neva: "La única diferencia entre los bolcheviques en Rusia y los bolcheviques en México es que los primeros han destruido al capital, mientras que los últimos han estado, y están, robándolo bajo la protección «constitucional»", *idem*.

préstamo a menos que el gobierno mexicano aceptara las demandas del Departamento de Estado estadounidense y le fuera extendido el reconocimiento de Washington. Endurecidas las posiciones las conferencias carecieron de sentido. Lamont regresó el 21 de octubre a Nueva York dejando abierta la posibilidad de un futuro reencuentro. La experiencia mostró a De la Huerta que la reanudación del pago no podía ser un fin autónomo y que cultivar la cercanía con las compañías petroleras manteniendo una política dura hacia los banqueros tenía poco valor estratégico.

El ascenso del gobierno republicano de Warren Harding produjo un cambio en la percepción de los asuntos mexicanos y una mayor influencia del sector financiero en el gobierno de Washington. El giro se debía en parte a la diplomacia financiera de Lamont en Europa, China y México, la que se observaba, por ejemplo, en su cuidado al reportar sus pasos a la Casa Blanca o al buscar coincidencias entre la nueva política y los intereses de sus representados. Al inicio de 1922, Hughes departió nuevamente con él y otros representantes de importantes firmas bancarias estadounidenses las preocupaciones comunes. Del encuentro se desprendió un mayor entendimiento con el Departamento de Estado y los banqueros pudieron reafirmar su deseo de consultar a la Casa Blanca antes de realizar nuevas inversiones internacionales. Y, aquí se incluía el caso de México.

Lamont concentró sus esfuerzos en organizar una reunión en París con los miembros del Comité Internacional de Banqueros sin descuidar las preocupaciones de los petroleros. Su objetivo era preparar mejores bases para su siguiente encuentro con el ministro mexicano. Desde luego, antes de alcanzarlo debió paliar el ambiente de incertidumbre que existía entre ciudadanos estadounidenses ante posibles y nuevas confiscaciones de propiedades en México. Esas preocupaciones se reflejaban en la correspondencia que recibía y en encuentros con inversionistas. Al respecto resulta ejemplar la reunión que tuvo lugar el 22 de marzo de 1922 en el Dutch Treat Club de New York. Ahí escuchó nuevamente la vieja idea de la necesidad de intervenir militarmente en México. Sin la intervención, se dijo, era imposible asegurar la correcta defensa de los intereses estadounidenses frente al bolchevismo mexicano. Pero ya para ese entonces y con la promesa de que De la Huerta pronto estaría en Nueva York, Lamont pudo exhibir una posición que hoy nos resulta sugerente no sólo porque ahí manifestó interesantes reflexiones antropológicas, dejó ver sus intenciones conciliatorias, o porque se distanció de las ideas de los petroleros, sino también porque eran sus expresiones públicas antes de salir a su gira europea:

No pienso que nosotros tengamos ningún derecho de ir a México en un esfuerzo para enderezar su situación y forzar nuestro punto de vista sobre los mexicanos. ¿Quiénes

somos nosotros para decir que nuestra civilización es perfecta, y para decir que el tipo de vida más alto y de mente es el nuestro? ¿Quiénes somos los americanos, que vivimos en medio del disturbio, quiénes somos para decir a los mexicanos que sus ideas de bienestar, aún de indolencia, de guardar tiempo para la reflexión o para el dulce ocio, de jugar con sus hijos durante largas y vanas horas, de mirar crecer las flores, de sentarse al sol y tocar la guitarra, quiénes somos, digo yo, para forzar a esa gente (que tuvo su propia civilización siglos antes de Jamestown o Plymouth) a marchar por las ideas de nuestra rápida y creciente República? Yo, por mi parte, manifiesto mi oposición a cualquier método de fuerza.³⁶⁶

Como se puede observar, Lamont aún no defendía abiertamente el nuevo papel que la posguerra asignaría a los grandes inversionistas estadounidenses como líderes de la economía mundial. Pero su viaje a Europa, no sólo le sirvió para acordar con los Tenedores de Bonos que el mejor método de pago era el depósito directo de los impuestos petroleros empleando al Banco Nacional de México como conducto para transferir los fondos a Nueva York;³⁶⁷ pues también pudo apreciar que el viejo continente tampoco presentaba buenas condiciones para ser objeto de préstamo. Los inversionistas estadounidenses comprendieron que convenía volver la vista a América Latina y así lo hicieron: flujos de capital comenzaron a moverse hacia países latinoamericanos como Perú, Colombia y Brasil, entre otros.³⁶⁸ Sin embargo, el caso de México era peculiar; requería inversión foránea pero estaba impedido para contratarla con la rapidez que deseaban sus nuevos funcionarios.

De la Huerta llegó a Nueva York acompañado de su secretario particular, Olayo Rubio, de su asesor Martín Luis Guzmán, del general Ryan, amigo personal de los presidentes Harding y Obregón y representante legal de firmas petroleras estadounidenses, y en el en el puerto ya lo esperaba Agustín Legorreta, director del Banco Nacional de México. Un amplio sector de la historiografía y versiones populares de la época afirman plausiblemente que De la Huerta era acompañado también por un gran nerviosismo; éste suponía la posibilidad de que se frustrara su contacto con los banqueros que se aprestaban a recibirlo: Mortimer Schiff de

³⁶⁶Cfr. Edward M. Lamont, *The Ambassador from Wall Street. The story of Thomas W. Lamont, J.P. Morgan's Chief Executive*. Nueva York, Madison Books.

³⁶⁷Linda Hall (1995), *Oil, banks, and politics. The United States and Postrevolutionary Mexico, 1917-1924*. Austin, University of Texas Press, pp. 93 y ss.

³⁶⁸La mayor presencia de los capitales estadounidenses puede ilustrarse en Marcelo de Paiva Abreu, "La Argentina y Brasil en los años treinta. Efectos de la política económica internacional británica y estadounidense"; y en Rosemary Thorp y Carlos Londoño, "El efecto de la Gran Depresión de 1929 en las economías de Perú y Colombia", ambos en Rosemary Thorp (1988), *América Latina en los años treinta. El papel de la periferia en la crisis mundial*. México, FCE.

la banca de inversión Kuhn Loeb; Charles Mitchel, presidente de National City Bank; Albert H. Wiggin, presidente del Chase Manhattan Bank; E.R. Peacock; y, desde luego, Thomas Lamont quien también representaba a la firma J.P. Morgan & Co.³⁶⁹

De la Huerta había sido instruido por Obregón para cuidar muchos detalles en el acuerdo que se alcanzara. Entre otros rubros, debía ser especialmente firme al negociar el pago de intereses sobre el periodo revolucionario, para presentar el problema de los ferrocarriles (del que los banqueros tenían una mala impresión y para el que sostenían el argumento de la privatización y la modificación de su sistema administrativo), de igual manera, Obregón insistió en que cualquier arreglo debería acompañarse de un empréstito con el que se daría impulso a las actividades agrícolas y vida a la prometida banca central.

En Nueva York, las negociaciones avanzaron con altibajos para finalmente enderezarse y llegar a la firma del Tratado De la Huerta-Lamont, el 16 de junio de ese año. Con el convenio se reanudaba el servicio de la deuda mexicana, sólo obrando así se abriría la puerta del reconocimiento y de los flujos de capital que el país necesitaba para sus proyectos de reconstrucción. Apenas se tuvieron noticias en México el acuerdo comenzó a ser festinado por un público realmente amplio en el que, por supuesto, se incluían diputados, senadores, gobernadores y connotados militares. Con sus felicitaciones se expresaron muestras simbólicas de cohesión y de mayor confianza en el porvenir.³⁷⁰ No obstante las felicitaciones públicas, el convenio fue visto con cautela por el círculo más cercano a Obregón. Las dudas se manifestaban porque el Tratado no aludía al ansiado préstamo y ello pese a que De la Huerta notificó a Obregón que tenía la seguridad de obtener un crédito por 25 millones de dólares (aproximadamente, 50 millones de pesos) para abrir del Banco Único de Emisión.³⁷¹ La cantidad habría sido sugerida por De la Huerta, en primer término a las compañías petroleras y a título personal, Edward

³⁶⁹En las negociaciones se rumoró sobre la escasa habilidad del ministro como negociador. Así, Hall, *op. cit.*, señala a Lamont como la persona que influyó en él para la consecución de los tratados de junio de 1922. Anónimos, describiendo estas circunstancias y con un encono especial hacia la actuación Agustín Legorreta y el Banco Nacional de México circularon entre altos funcionarios mexicanos en mayo de 1925. Cfr. "Datos sobre la intervención que tuvo el Banco Nacional de México" y su gerente en el convenio hecho entre el gobierno mexicano y la Casa Morgan de Nueva York, para el pago de los intereses de nuestra deuda", en AGN, FOC, exp. 104-N-11. Véase Memorándum confidencial del 27 de mayo de 1925 para Luis Montes de Oca sobre la actuación de A. Legorreta en el Tratado De la Huerta-Lamont, CEH, CMLXXV, doc. 01274.

³⁷⁰Algunos de los que enviaron fueron Juan Sánchez Azcona, Vicente Samano (diputado por Michoacán), Rafael Santos Alonso (senador), Francisco Seldner (cónsul en San Francisco), Adalberto Tejeda (gobernador de Veracruz), Aristeo Meza (presidente municipal de Comitán); cfr. AGN, FOC, Leg. 104-N-11.

³⁷¹Cfr. Emilio Zebadúa (1994), *op. cit.*

L. Doheny, uno de los más importantes inversionistas del ramo, respondió con un ofrecimiento de 5 millones de dólares, a cambio de garantizarle reducciones fiscales.³⁷² A través de la Secretaría de Relaciones, Obregón había tenido conocimiento de una oferta en Europa. En abril, la embajada en París avisó que ésta tendría por objeto formar un Banco Agrícola e Industrial, para el que se depositarían inicialmente “diez millones de pesos y ciento treinta millones de Bonos del Gobierno Francés”; incluso, “como prueba de su acuerdo y de su buena voluntad”, los banqueros franceses habían nombrado a un representante ante la Legación de México.³⁷³ Pese a su improbabilidad, De la Huerta, también alimentó la esperanza de lograr un préstamo europeo,³⁷⁴ aquí incluía la posibilidad de un contrato en España, opción que Obregón subordinó a la resolución de los asuntos estadounidenses.³⁷⁵

Habían otras razones para el resquemor, pues el acuerdo permitía varias interpretaciones en temas de alta importancia como los correspondientes a posibles indemnizaciones de compañías petroleras extranjeras.³⁷⁶ Indemnizaciones del todo opuestas a obligaciones fiscales no cumplidas por las compañías, por ejemplo, en territorio veracruzano, a decir del gobernador Adalberto Tejeda, la suma que debían las petroleras por concepto del impuesto de Derecho de Patente alcanzaba la cifra de 20 millones de pesos (lo que significaba casi la mitad del empréstito que se buscaba en el extranjero). Y claro, Tejeda estaba dispuesto a comprobar dicha suma por lo que ofreció a De la Huerta toda “la información detallada que necesite”.³⁷⁷

Además de la clase política, el pueblo llano también expresó sus reservas al préstamo que pretendía dar vida al Banco Único. Durante 1923, el Palacio Nacional recibió correspondencia de una gran cantidad de rincones del país previniendo al presidente:

Todo mundo teme que al terminar el gobierno actual, se vuelvan los billetes de tal Banco sin valor como los infalsificables. Que se trata de recoger el oro y la plata circulantes

³⁷² *Idem*. Cuando ocurrían estas negociaciones Doheny se encontraba litigando, en torno a la posesión de una rica propiedad inmueble, por lo que había razón para pensar que el arreglo del “préstamo” era posible, si existía –como ocurrió– un fallo favorable a sus intereses.

³⁷³ Cfr. Memorandum de Louis Roumagnac dirigido a la secretaria particular del Presidente de la República, en AGN, FOC, exp. 104-B.

³⁷⁴ Véase Emilio Zebadúa (1995), “El Banco de la revolución”, en *Historia Mexicana*. vol. XLV (1), julio-septiembre.

³⁷⁵ Véase De la Huerta a Obregón del 21 de abril de 1923 y respuesta de éste dos días después instruyéndolo para “dar una pequeña tregua a nuestro asunto con España”, en ACT, FFT, serie 10213, inv. 1069, exp. 2.

³⁷⁶ Cfr. Obregón a De la Huerta, del 6 de julio de 1922, en AGN, FOC, leg. 104-N-11.

³⁷⁷ Véase el “cablegrama” del 6 de junio de 1922, en *idem*.

para que el señor Presidente se los lleve al terminar su periodo. Los comerciantes dicen que como no habrá moneda fraccionaria en papel, no darán cambio de los billetes con moneda metálica y por tanto el que necesite comprar con papel deberá invertir todo su valor en mercancías”.³⁷⁸ Voces más serias tradujeron las preocupaciones latentes en la percepción popular; así, Manuel Padrés preveía la posibilidad de una crisis monetaria si la nueva organización no contaba con las reservas en oro suficientes para garantizar la confianza de los billetes que emitiría, pues al final de 1923 la plata acusaba una sobrevaluación importante que la había convertido en “moneda auxiliar de nuestro sistema monetario”.

Su cuestionamiento central era cómo lograr que los nuevos billetes inspiraran la confianza necesaria para que el público los prefiriera respecto de la moneda de plata.³⁷⁹ En consecuencia, su reflexión se orientaba hacia las modificaciones recomendables en el sistema monetario al inaugurar la banca central, y él apostaba por adoptar el patrón oro. Después veremos cómo este tipo de recomendaciones fueron recibidas e instrumentadas por los nuevos estadistas y cómo se articularon con la deficiente circulación de los billetes del banco central.

Más allá de percepciones particulares y de problemas pecuniarios estatales y federales, el Congreso ratificó el convenio en septiembre de ese año. En el dictamen de aprobación no olvidó subrayar sus objeciones: la falta de oportunidad del pago, la incapacidad económica del país, la inconveniencia de que la deuda ferrocarrilera pasara a ser garantizada por el gobierno, aceptar un impuesto del 10 por ciento sobre ingresos ferrocarrileros y el reconocimiento de las deudas de los estados.³⁸⁰

Además de los problemas ferrocarrileros, que representaban la parte más importante del convenio, llama la atención que se objetara la inoportunidad del pago. El Congreso observaba con cuidado los descuentos, prórrogas, concesiones y cancelaciones que en materia de deuda alcanzaban países europeos para su reconstrucción, así como que los problemas ingleses, alemanes y franceses provocaran un cambio importante en la relación de México con sus acreedores internacionales:

Como los países aliados (señalaba el diputado Ignacio García Téllez) no tenían la cantidad suficiente para garantizar en metálico, garantizaron con valores internacionales, y una

³⁷⁸Comentaba Herminia Olvera desde Puebla que estos rumores eran similares a los que recién había escuchado en Estados Unidos, otras manifestaciones similares en AGN, FOC, exp. 104-B.

³⁷⁹Cfr. Memorándum de M. Padrés a Obregón, 1o. de noviembre de 1923, en AGN, FOC, exp. 104-B. Posiblemente la relación de Padrés con Obregón comenzó en 1919, cuando Padrés trabajó como gerente del Banco Refaccionario de Yucatán; cfr. ACT, FAO, exp. p-1.211, inv. 959.

³⁸⁰Cfr. “Dictamen y aprobación del mismo que ratifica el Convenio entre el Ejecutivo y el Comité Internacional de Banqueros con negocios en México”. *Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 22 de mayo de 1920 a 25 de septiembre de 1923*, vol. IX., México, 1961.

de las principales condiciones (fue...) que los banqueros aliados, de acuerdo con sus diversos países, se comprometieran a ceder a los Estados Unidos, los créditos que tenían en contra de los países latinoamericanos... Nuestros únicos acreedores, puede decirse, son los Estados Unidos; ellos tienen en sus manos, dada su potencia tan grande económica y política, el destino de la orientación de nuestra política financiera nacional.³⁸¹

Podrían, desde luego, haberse pedido pruebas no aportadas al orador, sin embargo, su discurso reflejaba la conciencia de un cambio importante producido por un agente externo; la guerra europea había disuelto el equilibrio internacional entre los acreedores mexicanos tan perseguido por Díaz y, ahora sólo anhelado por los revolucionarios. Las condiciones de negociación podrían volverse más difíciles.

Pero las objeciones se contrastaron con las ventajas que vehementemente defendieron las comisiones que estudiaron el documento. Las comisiones de Crédito, Hacienda y Puntos Constitucionales, estaban influidas por el entonces más homogéneo poder de los sonorenses y el Congreso todavía no acusaba divisiones importantes. Así bajo la presidencia de Juan Manuel Álvarez del Castillo diputados como Luis León, Manuel Puig Cassauranc, Roberto Casas Alatríste y Martín Luis Guzmán desarrollaron sus argumentos en defensa del convenio, sin que aún se revelasen diferencias, digámoslo así, de tipo clientelar con el presidente o con algún ministro en particular, tal y como sí se expresarían el año siguiente en medio de la competencia electoral. En el debate, la voz del diputado agrarista Antonio Díaz Soto y Gama fue el contraste de mayor eco con los miembros de las comisiones. Él se pronunció contra de los lenguajes técnicos y en favor de “hacer obra de vulgarización”, de hacer comprensible al público amplio los contenidos del convenio. Por su parte, los cooperatistas Casas Alatríste, León y Guzmán respondieron con claridad.

En principio destacaron el hecho de que el acuerdo supusiese la aceptación de una moratoria sobre los intereses vencidos de la deuda, mismos que se redondearon en 414 millones de pesos y se pagarían, junto con los poco más de 1,000 millones de pesos del principal, en 40 años que comenzarían en 1928. Para los años que se abrían entre 1923 y 1928 no se pagarían las amortizaciones vencidas pero deberían pagarse los denominados intereses corrientes que ascenderían a poco más de 50 millones de pesos; los que fueron diferenciados de los intereses vencidos porque se había buscado que el convenio se ajustara a la capacidad de pago de la economía mexicana. De este modo, las expectativas concedían un lustro para consolidar el inicio de la recuperación. El debate transcurrió y aunque cada

³⁸¹ *Idem.*

vez se declaraba más convencido de “la habilidad del ministro de Hacienda y de la honradez del gobierno”, Antonio Díaz Soto y Gama insistió en esclarecer los alcances del acuerdo que debía ratificar con sus compañeros de curul, por lo que inquirió sobre su impacto en los ferrocarriles. Fue en este punto donde recibió la respuesta más encendida de las comisiones; Luis L. León subió a la tribuna para decir que “sin el convenio” el sistema ferrocarrilero podría pasar inmediatamente a manos extranjeras. Agregando en el tono que quería escuchar su interrogador: “Por lo demás, lo que debe interesar más al compañero Soto y Gama y a todos los radicales de esta Cámara, es un valor que no puede calcularse: es el valor moral de impedir que los ferrocarriles pasen a poder de un gobierno extranjero”.³⁸² El resto vino por añadidura. León, ingeniero agrónomo de Chapingo cercano a Obregón y cuyos trabajos camerales fueron recompensados con la Subsecretaría de Hacienda, pudo exaltar los logros del proletariado y denostar a su enemigo natural, “el capitalismo americano”. A su encendida oratoria siguió el ruido de los aplausos y el ambiente radical de la asamblea preparó los ánimos para la aprobación del Convenio.

El fervor ideológico y el jacobinismo que reinaba en la Cámara hacían imposible que se atendieran preguntas simples. Por eso, cuando Salvador Munguía, un diputado que cruzó por esa legislatura con poca gloria pero quizá con mucha pena, preguntó por la *personalidad jurídica* del Comité Internacional de Banqueros para negociar con los representantes oficiales de la República Mexicana, sólo escuchó hostilidad, rechiflas y desorden por respuesta. En medio de los gritos que pedían la votación expedita del dictamen, Munguía pudo hacer un par de preguntas más: la primera fue sobre las obligaciones que contraían los banqueros pues si bien el Convenio especificaba los compromisos asumidos por el gobierno era ambiguo al tratar los de su “contraparte”; la segunda fue sobre la posibilidad económica real que se disponía para cumplir con las obligaciones que iban a ratificar.

Así, en un clima sobreideologizado, la Cámara de Diputados revisó el convenio con los “representantes” de los tenedores de los bonos de la deuda mexicana. Pero tal ambiente no afectaría para que las preguntas de Munguía se convirtieran en más de 80 cuestionamientos en el estudio jurídico que elaboró, casi dos años después Toribio Esquivel Obregón. Su estudio fue ordenado por Luis Gallopin, tenedor de títulos de la deuda mexicana y escrupuloso seguidor de la suerte de éstos, pues Esquivel Obregón fungía como su abogado. De manera clara, manifestó sus dudas sobre la naturaleza jurídica del Comité, su personalidad legal, y

³⁸² *Idem.*

sus propósitos.³⁸³ Los tres puntos de Munguía formaron el fundamento de su crítica, aunque definitivamente también lo trascendieron. Esquivel Obregón no vaciló en calificar como un error grave el hecho de que el Congreso hubiese supuesto u obviado los mencionados atributos. Éstos, de origen, eran los mismos a los que habían hecho referencia las sencillas, pero nunca bien respondidas preguntas del diputado Munguía. Pues su simpleza, que era su cualidad más penetrante, destacaba por dirigirse al fundamento del Convenio: el tema de la personalidad jurídica del Comité Internacional de Banqueros que no era otro sino el de su existencia legal en México. Esquivel Obregón fue claro: para obtener tal reconocimiento dicha asociación debió haberse sujetado al artículo 265 del Código de Comercio, según el cual para adquirir derechos y obligaciones se requería inscribir a la sociedad respectiva en el Registro de Comercio con todos los protocolos respectivos y que obligaban a las sociedades por acciones (como era el caso) a publicar balances anuales, certificar a sus representantes legales y de dirección, etcétera. Pero todos estos requisitos no se consideraron relevantes en el sentir del legislativo que trató la cuestión del convenio durante septiembre de 1923. ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué exigirles respetar las leyes mexicanas? ¿Acaso no era “verdaderamente pueril” (como reprendió el diputado Enrique Parra a Munguía) “dudar que se llame a una conferencia internacional al gobierno de México, si no estuvieran suficientemente autorizados?” Claro, “¿cómo dudar de los banqueros que tienen las finanzas del mundo en sus manos?” Las “pueriles” preguntas de Munguía alcanzaban una nueva connotación a la luz de una reflexión jurídica consistente y permitían ver con ojos distintos a los del triunfalismo revolucionario la gestión de Adolfo de la Huerta. Pues si el Comité no admitía ser una organización corresponsable de acuerdo con las leyes mexicanas, ni una corporación plenamente ajustada a la legislación americana, sino –en el mejor de los casos– una especie de agente al servicio del gobierno, entonces la pregunta obligada era: ¿por qué el ministro de Hacienda de México no había exigido que el Comité cumpliera con las formalidades de la ley? Poco más de un lustro después las “pueriles” preguntas de Munguía estarían más presentes, si no en los principios fundantes de un nuevo convenio sí en la estrategia mexicana con la que se

³⁸³ Cfr. Toribio Esquivel Obregón (s/f), “Estudio jurídico del arreglo entre el gobierno de México e International Committee of Bankers on Mexico”, preparado por L. Gallopin, 160 Broadway, Nueva York (mecanoescrito), en CEH, CMLXXV, doc. 66. Tras su escrupuloso examen del Tratado De la Huerta-Lamont concluyó que el convenio era ilegítimo. Conviene señalar que Gallopin intentó negociar con el gobierno obregonista por lo menos desde junio de 1922, en lo que fue la búsqueda de un camino alternativo al encabezado por el Comité neoyorquino; cfr. Manuel Padrés a Fernando Torreblanca, 19 de junio de 1922, AGN, FOC, leg. N-104-11.

afrontó la negociación con el Comité y, por supuesto, en las demandas judiciales de Gallopin.

Quizá las prisas del gobierno obregonista llevaron a cabo un *quid pro quo* con el Comité Internacional de Banqueros; según el cual el Comité reconocía *de facto* al gobierno de Obregón y éste reconocía al Comité como representante, igualmente, *de facto* de todos los tenedores de títulos de la deuda mexicana; aunque estos últimos no estuviesen del todo de acuerdo con las decisiones del Comité, tal y como se observaba con el caso de Gallopin o, en de Wilbur Bates.³⁸⁴

Como Munguía, antes de Esquivel Obregón otros políticos y estudiosos criticaron las ventajas y los inconvenientes del Convenio; el problema del crédito interior y exterior, la moratoria que el mismo suponía, el aumento del *stock* circulante que muy probablemente lo acompañaría, la mayor circulación de documentos de crédito, el frustrado tema del establecimiento del futuro Banco de la Nación, las obligaciones a que se sometía la nación y el reconocimiento de las deudas justamente contraídas por gobiernos legítimos anteriores. Pero, la exposición de Esquivel Obregón tenía varias virtudes adicionales; dos pueden ser destacadas rápidamente. En primer término, elevaba el nivel de sistematicidad de los enjuiciamientos previos. En segundo, permitía entrever el vínculo que une, en los países atrasados, a los sistemas financieros ineficientes y jurídicamente obsoletos con las políticas monetarias y fiscales. Desde esta perspectiva, la rehabilitación financiera privada y pública del país atravesaba necesariamente por el restablecimiento de la deuda pública en tanto mecanismo que (se calculaba) permitiría restablecer el crédito internacional. Por eso las comisiones legislativas que se abocaron a su estudio recomendaron enfáticamente su ratificación y no su “festinación cortesana”.³⁸⁵

Pero la ratificación del convenio Lamont-De la Huerta lejos de significar solidez a la posición del ministro de Hacienda en el gabinete obregonista trajo el efecto contrario. El Convenio acentuó la desconfianza de Obregón hacia él. El problema del préstamo para la fundación del Banco Único de Emisión sólo fue otra de las causas. Poco antes de salir de Nueva York, De la Huerta insistió a Lamont la importancia del empréstito, a lo que el banquero contestó recordando que era necesario esperar el reconocimiento de Washington y a que México hiciera “un sincero y vigoroso esfuerzo” para cumplir con sus obligaciones financieras”.³⁸⁶ Dos

³⁸⁴La posición de Bates, en su “Carta abierta a Mr. Thomas Lamont”, relativa al Acuerdo Banqueros-De la Huerta. Nueva York, International Association for Advancement of Religious and Political Liberty, Inc., 10 de octubre de 1922; en CEH, CMLXXV, doc. 14494.

³⁸⁵*Idem.*

³⁸⁶Cfr. Pedro Castro Martínez (1997), *Adolfo de la Huerta: una vida en la revolución (1920-1925)*. Tesis de doctorado, UNAM, FFL.

meses después de la ratificación del Convenio, en noviembre de 1922, De la Huerta sostuvo que había recibido promesas del préstamo por parte de la banca francesa y fue más allá afirmando que esto no sólo estaba “confirmado” sino “asegurado”.³⁸⁷ De la Huerta anunció un viaje a París pero estando de nuevo en Nueva York le fue anunciado que no sería recibido. La posibilidad se había diluido y sus palabras ya no resultaban creíbles a Obregón. Todavía a escasos días de que ocurrieran las reuniones de Bucareli, De la Huerta recordaba a Obregón el supuesto “compromiso formal que existe de parte de los banqueros de Nueva York de flotar empréstito para deuda agraria, obras de irrigación y otras atenciones tan luego venga el reconocimiento; también debo participarte que según últimas noticias asuntos del banco único es un hecho”.³⁸⁸ Pero no sólo no llegó el prometido préstamo sino que el comienzo de las pláticas de Bucareli hizo palpable la desconfianza del presidente hacia De la Huerta y su inclinación por la estrategia dirigida por Pani desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quizá intentando recuperar la confianza del caudillo, De la Huerta insistió en los trámites que llevaba adelante en J.P. Morgan para resucitar las gestiones para fundar el banco único. Sin embargo, las decisiones ya estaban tomadas y un día antes del inicio de las conversaciones de Bucareli, Obregón le respondió en forma muy clara: “sigo creyendo que estos señores tratan de ganar tiempo nada más, halagando nuestras esperanzas”.³⁸⁹ Días después, los efectos reales e imaginarios de los denominados “Tratados” de Bucareli empeorarían la ya tensa relación de estos importantes personajes.

Al comenzar mayo tuvieron nuevamente la oportunidad de disentir sobre la solución que se daría al problema de los pagos atrasados del gobierno a sus empleados.³⁹⁰ El caudillo observaba la pertinencia de rectificar su posición en el campo financiero; de no hacerlo correría el riesgo de perder el control de sus batallas políticas. En la retrospectiva que puede ofrecer el paso de un año, los logros diplomático financieros de Adolfo de la Huerta resultaban cuestionables. Obre-

³⁸⁷ Al respecto, cfr. Emilio Zebadúa (1995), *op. cit.*

³⁸⁸ Cfr. De la Huerta a Álvaro Obregón, 22 de abril de 1923, en AGN, FOC, leg. 104-N-11.

³⁸⁹ Cfr. correspondencia De la Huerta-Obregón, del 12 y 13 de mayo de 1923, en *idem*.

³⁹⁰ Obregón abogaba por una reducción de sueldos y De la Huerta por recortes de personal en secretarías como la de Agricultura y reducir gastos en guerra. Obregón comentó: “sinceramente no me siento hacendista” y agregó sutilmente un punto que después adujo para explicar el fracaso económico de su gobierno: “dada la confianza que tus conocimientos y tu honorabilidad me han inspirado” tu ramo “ha sido uno de los que menos he procurado atender y que debido a eso principalmente, no he querido tomar ninguna disposición de trascendencia mientras tú no regreses, pero tu retorno se va dilatando más de lo que creíamos y un remedio radical está reclamando el mal que te señalo”, cfr. Obregón a De la Huerta del 10 de mayo de 1923; respuesta de ese mismo día y de Obregón uno después en ACT, FFT, serie 13010213, exp. 2, inv. 1069.

gón mismo había intercedido para activar el estancamiento en el que cayó el acuerdo de su gobierno con el Comité Internacional de Banqueros; de eso era –pudo haber pensado– de lo que precisamente tratarían los representantes presidenciales en Bucareli: de reactivar los acuerdos rescatables y de renegociar los inoperantes.

Así, en mayo de 1923 con la competencia presidencial en puerta, Obregón optó por el camino alternativo que construía con su ministro de Relaciones, Alberto J. Pani desde hacía dos años. La opción era que representantes debidamente compenetrados con la política y las miras de ambos presidentes intercambiaran impresiones durante un tiempo corto y “con el solo fin de informar luego a sus respectivos altos comitentes”. “Sugestión” que el general James A. Ryan comunicó a Obregón y que fue tan bien vista por éste que consideró “ocioso” expresarle la satisfacción que le causaba; concluyendo que así se alcanzaría “más fácilmente la completa posesión de la verdad”, se rectificarían errores lamentables y se abreviarían los “trámites un acercamiento real hacia la deseada normalización” de las relaciones diplomáticas.³⁹¹

Adolfo de la Huerta había cooperado para abrir esta estrategia de acercamiento. Cuando finalizó su negociación con los banqueros se trasladó a Washington para atender un encuentro informal con el presidente estadounidense promovido por Lamont, quien veía en De la Huerta a un personaje con influencia en el medio político mexicano. Lamont esperaba que de la entrevista surgieran señales que agilizaran el arreglo de los negocios mutuos. Sin embargo, pronto se reveló que Obregón no contó con la posibilidad de tal invitación, pues con su reacción pareció desaprovechar la entrevista. Así, Obregón parecía pensar más en términos de control político interno que como estadista cuando exigió la oficialización de la visita y luego prohibió a su ministro insinuar el tema del reconocimiento. Por ello su visita además de informal también fue insustancial; su propósito era simbólico, pero los contenidos significativos estaban por descifrarse. La cancillería mexicana no parecía interesada en encontrar su claridad. El encargado de negocios de México en Washington, Manuel Téllez, quien mantenía una estrecha relación con Pani y fue señalado por De la Huerta como un obstáculo en sus negociaciones con los banqueros, literalmente ignoró su presencia en la capital estadounidense. Claro que como ignorancia su actitud era un exceso, pero Téllez

³⁹¹Véase Obregón a Ryan, del 9 de abril de 1923, en Alberto J. Pani (1953), *Las Conferencias de Bucareli*. México, Jus. Posteriormente Obregón y Calles desconfiarían de él, incluso lo considerarían un “enemigo”. Lo que sucedió más por sus relaciones con De la Huerta que por ser un doble agente; véase A. Elías a Montes de Oca, 19 de enero de 1926, doc. 02682, CEH, CMLXXV; y respuesta de éste confirmando tener informaciones previas similares, *ibidem*. doc. 02729.

podría haber alegado puerilmente que De la Huerta viajaba como “ciudadano privado”. Además de las intrigas, Harding no tenía bases firmes para conceder veracidad a posibles dichos del ministro mexicano; Obregón también podía sospechar que el fin de su ministro era promocionar su imagen política para la próxima carrera presidencial. Al margen de las suspicacias era claro que independientemente de las vacilaciones cometidas por De la Huerta, Obregón no planeó esta batalla financiera con arreglo a una estrategia diplomática simultánea. Así, más allá de que Pani deslustrara las negociaciones del ministro de Hacienda o de que éste interfiriera en los asuntos del Ministerio de Relaciones, lo cierto sería que el Convenio Lamont-De la Huerta sería revisado con los Tratados de Bucareli, y que el reconocimiento no trajo empréstitos sino que precedió una nueva rebelión militar.

Un amplio conjunto de condiciones agudizadas por el asesinato de Villa propició que para octubre se hiciera claro el rompimiento de la alianza que condujo a los caudillos sonorenses a la cúspide del poder político. Una historia de suspicacias entre las secretarías de Relaciones Exteriores y Hacienda, parecía haber llevado a ese punto a los rebeldes de Agua Prieta.³⁹² Sólo faltaba, como gustaba decir Obregón, *la paja que quebrara al camello*; las circunstancias que rodearon la lectura del informe presidencial de Obregón y la agria respuesta que le dio Jorge Prieto Laurens, en su calidad de presidente del Congreso y de candidato desairado al gobierno potosino, brindaron esa oportunidad.³⁹³

Poco después, en actitud de cautela y reflexión, Obregón se retiró a su hacienda de El Fuerte en Ocotlán, Jalisco, desde ahí solicitó a Fernando Torreblanca, su secretario particular y futuro yerno de Plutarco Elías Calles, el envío de los expedientes relativos al Convenio Lamont-De la Huerta de junio de 1922, así como los de las *conferencias* de Bucareli. Ahí estudió las modificaciones que proponía Pani al Convenio y preparó la correspondencia que dirigía a Lamont relativa a los cam-

³⁹² “Pirotecnia cancilleresa” la llamó Rafael Trujillo (1957), *Adolfo de la Huerta y los Tratados de Bucareli*. México. Porrúa. Connotado delahuertista, Trujillo fecha la rivalidad de Pani-De la Huerta en 1921, agravándose con la disputa sostenida en torno a la representación del gobierno de Obregón ante el Comité de Banqueros. De la Huerta manifestó sus suspicacias contra la Secretaría de Relaciones a Obregón, quien intentó tranquilizarlo prometiéndole “exigir responsabilidades al señor (Manuel) Téllez”, véase Obregón a De la Huerta, 27 de abril de 1923. Fecha que casi coincidía con la noticia que tuvo De la Huerta de las conferencias de Bucareli; cfr. Pedro Castro Martínez (1990), *Adolfo de la Huerta y la Revolución mexicana*. México, INHERM-UAM.

³⁹³ El *Caudillo* fue mal recibido en contraste con los vítores lanzados por los diputados a Prieto y De la Huerta. Prieto se negó a entregar su texto de respuesta a Obregón antes de que éste se presentara al Congreso, además tachó la candidatura de Calles de imposición y criticó la situación de San Luis y Nuevo León. Cfr. Miguel Alessio Robles (1940), “Ruptura Obregón, Calles y De la Huerta”, en *Historia de la Revolución Mexicana*. José Menéndez (ed.), México, Ediciones Águilas, t. II.

bios que consideraba pertinentes y en los que, por cierto, mencionaba “desautorizaciones” y la próxima publicación de una nueva decisión presidencial.³⁹⁴ Era claro que Obregón analizaba con mayor detenimiento la información de los acuerdos en relación con el estado que guardaban las finanzas públicas pues en éstas ya se observaban desequilibrios importantes. De la Huerta tuvo noticias de los planes de Obregón y anticipándose a él declaró a la prensa los problemas que tuvo con Pani, al que acusó de obstaculizar la negociación de la deuda y el reconocimiento.³⁹⁵

Con otros ritmos e intenciones, las inquietudes políticas también se reflejaban en las cámaras. Desde su inicio la revolución había revitalizado la independencia del Congreso y, como sucedió con Carranza, los diputados se mostraron poco obsesivos al corresponder los deseos de Obregón. Pero el lento proceso formativo del sistema político de partidos transcurría en medio de prácticas caudillescas, esto es, bajo un ambiente de tránsito sociopolítico dominado por los personalismos de hombres fuertes y reglas poco claras. Las pugnas de los diputados cooperatistas y la coalición agrolaborista que apoyó a Obregón y Calles se encuadraba en este horizonte en el que prevalecía la fragilidad de los consensos. Los asesinatos políticos ilustran con claridad estos rostros del caudillismo.³⁹⁶ Al final de 1923, la esfera política lucía polarizada; era un momento de reafirmación de convicciones aunque también de duda y de desconfianza. Fue entonces, en su retiro de Ocotlán, que Obregón diseñó su estrategia para contrarrestar la oposición de los cooperatistas y su creciente alianza con su ex secretario de Hacienda, a quien finalmente postularon como su candidato a la Presidencia.

Desde luego, pueden citarse otras causas de la rebelión “delahuertista”; no fue claro si los candidatos buscaban seguidores o, como pareció ser el caso con De la Huerta, si los “seguidores” hacían a los candidatos. Se puede recordar que la recaída física de Calles (abril de 1923) suscitó dudas sobre su candidatura y alentó la participación de otros competidores que manifestaron su recelo a la alianza Obregón-Calles, como fue el caso de los generales Salvador Alvarado, Enrique Estrada, Ángel Flores y Raúl Madero.

³⁹⁴Véase correspondencia Obregón-Torreblanca, 13 de octubre; Obregón-Pani, octubre y noviembre en AGN, FOC, leg. 104-N-11.

³⁹⁵También hay que considerarse atentados frustrados como el del 15 de agosto de 1922, perpetrado por Porfirio Arenas contra diputados cooperatistas proclives a De la Huerta. Véanse declaraciones de Prieto Laurens a *Excelsior*, 17 de agosto de 1922, responsabilizando al partido laborista.

³⁹⁶El atentado ocurrió en la Cámara Baja cuando el Convenio era objeto de atención pública. Las investigaciones policíacas responsabilizaron a los laboristas cfr. *Excelsior*, 16 de agosto.

Finalmente, la anhelada estabilidad política y económica se diluyó en medio de una rebelión que, para empeorar las cosas, nació sin liderazgo.³⁹⁷ Fue a la luz de la nueva división y urgidos de nuevas alternativas, que los obregonistas apuraron la reconciliación del Estado con la banca nacional. Era cierto que el gobierno de Obregón había iniciado con signos alentadores, pero éstos se habían diluido con las quiebras de casas bancarias y la mayor atención de Adolfo de la Huerta a los asuntos foráneos y a la competencia presidencial. Ahora, los efectos de la intransigente posición de la banca internacional y del ambiente nacionalista que reinaba en el país desplazaban esta relación a otros planos y al ensayo de otras soluciones. La primera sería la creación de un consenso amplio sobre el horizonte en el que se debían orientar las reformas de la legislación financiera. Pani, el nuevo ministro de Hacienda, se puso al frente de esta tarea lanzando una convocatoria a los banqueros: la primera Convención Nacional Bancaria estaba en puerta.

Mirar hacia dentro; de convenciones y cambios

Además de determinar el estado en el que se encontraba la Hacienda Pública después del ejercicio de Adolfo de la Huerta, de lanzar un estricto “plan de economías” que se postergaría por varios años, de reflexionar sobre el sentido en el que debería de modificar los acuerdos alcanzados con el Comité Internacional de Banqueros y de despedir a los seguidores de éste de la administración obregonista, Alberto J. Pani inició un trabajo de acercamiento con los banqueros. Pani sabía preparar encuentros y conocía el arte de limar diferencias, su experiencia se acreditaba en sus actuaciones como alto funcionario de la Secretaría de Instrucción Pública, donde auscultó trabajos de reforma en la instrucción elemental y como secretario de Industria y Comercio del carrancismo ensayando convenciones con representantes de cámaras comerciales.³⁹⁸ Naturalmente como otras medi-

³⁹⁷ Testigos de la época dieron cuenta de esta carencia que la historiografía posterior también ha constatado, algunos ejemplos podrían ser Luis Monroy Durán (1924), *El último caudillo. Apuntes para la historia de México, acerca del movimiento armado de 1923, en contra del gobierno constituido*. México, José Gutiérrez (ed.). Alonso Capetillo (1925), *La rebelión sin cabeza. Génesis y desarrollo del movimiento delahuertista*. México, Botas. Alfonso Guzmán, Esparza (1958), *Memorias de don Adolfo de la Huerta según su propio dictado*. México, Ediciones Guzmán, Rafael Trujillo (1966), *Adolfo de la Huerta y los tratados de Bucareli*. México, Librería de Manuel Porrúa. Tamayo Jorge y Laura Romero (1982), *La rebelión descabezada (el delahuertismo en Jalisco)*. Cuadernos de Divulgación, 15. Guadalajara, Universidad de Guadalajara. Enrique Arriola (1984), *La rebelión de la huertista*. México, Cultura SEP. Enrique Plascencia de la Parra (1996), *La rebelión delahuertista (1923-1924). Sus escenarios y personajes*. Tesis de doctorado, UNAM, FFL. Castro Martínez, *op. cit.*

³⁹⁸ Véase Alberto Pani (1918), *En camino hacia la democracia*. México, Dirección de Talleres Gráficos.

das del género ésta era motivo de suspicacias entre la clase política de la época.³⁹⁹ Pani la ensayó, entre otras razones porque preveía los obstáculos que encontraría en el camino de la negociación de empréstitos internacionales. Tratos que se complicarían ahora que el país escuchaba a la revuelta delahuertista lanzar acusaciones en las que señalaba al gobierno obregonista por aceptar préstamos oscuros a cambio de ceder en temas estratégicos para los mexicanos y que los inversionistas extranjeros temían la vuelta de un periodo largo de inestabilidad política. Pani entendió que debería vigilar los delicados problemas de la diplomacia financiera internacional sin desatender las variables internas, como había sucedido con su antecesor en el ramo: la nivelación del presupuesto, la búsqueda de nuevos ingresos fiscales, la reducción de los gastos gubernamentales y la urgente rehabilitación del crédito bancario como medio para reactivar las economías del campo y la industria figuraban entre sus prioridades.

Con el delahuertismo extendiéndose por Veracruz, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Tabasco la inquietud también crecía entre obregonistas y empresarios. Ante este panorama, el nuevo ministro de Hacienda debía cerrar filas y reclutar gente de dinero para apoyar la causa gubernamental. Al atender los costos de la rebelión, Pani observó cómo crecían los gastos y se cerraban las puertas a cualquier préstamo externo. Se encontró, adicionalmente, con una de las paradojas que desgastó al carrancismo: si quería tener éxito para contratar un empréstito debía pagar al Comité Internacional de Banqueros con objeto de generar la confianza para que concedieran futuros préstamos. Para arreglar el problema de la deuda había que pagar pero la voluntad no bastaba, hacía falta dinero real. Pani sabía, y así lo experimentó, que el camino del empréstito internacional no tenía salida rápida.⁴⁰⁰ Pudo entonces preguntarse no sólo si era posible rehabilitar el crédito sin negociar con la banca nacional, sino si era aconsejable el intentarlo. La rigidización podría ser conveniente con los enemigos militares pero la mano dura no parecía tener ningun-

³⁹⁹ Un ejemplo de posiciones críticas frente a esos encuentros es el de Carlos Basave en los apuntes de sus memorias escribió, como “vocal en la Cámara de Comercio... sé a qué atenerme a propósito de su funcionamiento (de las Cámaras) y lo que representaba ella en realidad”. Enfatizando maridajes espurios entre cámaras y autoridades, observó los defectos de la sobrerepresentación: “consignaré también la dificultad que siempre se presenta entre nosotros para completar *quórum*... para tomar o legalizar resoluciones de las compañías o de juntas o Cámaras”. Los ministros, afirmaba, “andan a la caza de los miembros indispensables” y con frecuencia sobresalía la indolencia y la delegación irresponsable de facultades en la que “los más activos y los más constantes son los que se llegan a imponer sin resistencias. Por analogía [*sic*] puede decirse de la composición de las Cámaras Agrícolas o de las Industriales, cosa semejante a la señalada antes”. Y, aunque estas experiencias no podrían trasladarse automáticamente a los giros bancarios, también ahí habían elementos decorativos; Basave recordó a T. Honey, accionista principal del Banco Internacional Hipotecario. Basave quien fue cercano a Pani en el carrancismo (distanciándose de él probablemente porque Pani no se desligó de la rebelión obregonista), le criticó haberse “empeñado en resucitar esas cámaras”, cfr. CESU, FCB, leg. 7, exp. 1, fojas, 1303 a 1325.

⁴⁰⁰ Sobre las dificultades insuperables que encontró, véase Zebadúa (1994), *op. cit.*, pp. 244 y ss.

na razón con empresarios que se mostraban neutrales e incluso cooperativos en ese nuevo momento de guerra. Además, la guerra no estaba resuelta y los revolucionarios conocían los problemas que enfrentarían si se prolongaba, algo que podría suceder dado que más de la mitad del ejército se había rebelado: menos recursos, más descontento de las poblaciones afectadas, parálisis de algunas actividades económicas, aparición de nuevos liderazgos políticos (algunos de ellos indeseables pero igualmente necesarios) por sólo contar algunos puntos del círculo vicioso que unían a la política con la economía en los momentos que crecía la violencia revolucionaria. Ante la posibilidad de que las circunstancias se volvieran más graves no resultó extraño que el gobierno de Obregón deseara impedir cualquier otra nueva fragmentación. De talante mesurado y pensando siempre en términos estratégicos, Pani favorecía la posibilidad de construir mecanismos de conciliación con la banca. Así que la idea de su consejero Fernando de la Fuente relativa a organizar una convención bancaria fue recibida por él con gran beneplácito.

Pani planeó para enero la fecha del encuentro con los banqueros, sin embargo ese mes fue particularmente álgido en términos político militares, por esto la Primera Convención Bancaria debió posponerse e iniciar hasta el 1o. de febrero de 1924. En la distancia podríamos llamar simbólica a esa fecha pues coincidió con el anuncio de dos muertes, la de Lenin y la de Lázaro Cárdenas. Obregón –quien había seguido la situación en Rusia, a través de personajes cercanos como Luis L. León, y comprendía que ese país podría vivir una disputa política crucial para su historia– envió un pésame que publicó la prensa de ese día en el que recordaba a Lenin como “líder de los movimientos laboristas internacionales”. La versión (falsa) del asesinato de Cárdenas pudo haberle traído a la memoria el caso de Felipe Carrillo Puerto, desde luego, la condena no se hizo esperar y hubo la natural incertidumbre que acompaña a la caída de un muy fiel subordinado. Pero no sucedió nada más salvo algunos rumores que empezaban a correr sobre un nuevo levantamiento villista en Canutillo. La maquinaria de guerra debía continuar adelante y atender los frentes más importantes, como el del general Estrada quien se movía de Michoacán con rumbo a Jalisco después de haber sufrido varios reveses.

Así, a casi tres lustros de iniciada la revolución y en medio de una nueva rebelión venía a celebrarse un nuevo encuentro, ahora público, entre revolucionarios y representantes de la banca, bajo el membrete de “Primera Convención Bancaria”. Ésta comenzó al filo de las 11:00 horas del 1o. de febrero de 1924 en el Salón Panamericano del Palacio Nacional. El licenciado Fernando de la Fuente presidía nerviosamente los trabajos de la comisión organizadora, siendo secundado por

la mayor experiencia de Fernando González Roa, Enrique Martínez Sobral,⁴⁰¹ así como del trabajo de Mario Guasp, José D. Aguayo y Elías S.A. de Lima, como representantes de la Secretaría de Hacienda, quienes en ese momento recibían los documentos de acreditación de los banqueros. Así, se dieron por buenas los oficios de empresarios ya famosos en el porfiriato como Enrique Creel, Alberto Zambrano, H. Weldon, Miguel Macedo, Agustín Legorreta, Salvador M. Cancino y de conocidos representantes bancarios como Agustín Rodríguez o Nicanor Gurría Urgell. Desde esa sesión de apertura, Legorreta –quien encarnaba el mayor número de representaciones bancarias– comenzó, junto con Creel, a jugar el papel protagónico que caracterizaría su actuación durante la Convención; por sugerencia suya ésta se dividió en cuatro comisiones: la primera se ocuparía de los bancos hipotecarios y refaccionarios, la segunda atendería “a los bancos que actualmente operan en el país, a los que deberían agregarse las casas bancarias; la tercera para estudiar los problemas relacionados con las sucursales de los Bancos Extranjeros”; mientras que la última revisaría los puntos generales adoptados en las tres comisiones anteriores. Martínez Sobral contestó proponiendo la formación de una quinta comisión, ésta tendría funciones de “coordinadora y censora de los trabajos encomendados a los elementos especialistas, así como a los de la cuarta Comisión”.⁴⁰² La que evidentemente se había formado antes del encuentro con los funcionarios bajo el concurso del grupo de mayor influencia entre los banqueros. No fue menos simbólico de la imprevención con la que arribaron los funcionarios gubernamentales a la Convención el que un representante de los bancos refaccionarios privados y ahora designado miembro de la primera comisión, el señor José Burgos, haya sido quien sugiriera que la Caja de Préstamos también enviara un representante a esta comisión. Sólo en ese momento, De la Fuente reaccionó percatándose de esa ausencia para contestar titubeante: “podemos, tengo la certeza, contar con el representante..., podemos integrar la comisión respectiva incluyendo el representante de la Caja sin expresar su nombre”.⁴⁰³

⁴⁰¹ Sobre el nerviosismo con que comenzó, véase discurso inaugural de De la Fuente, en *Convención Bancaria de 1924*. México, Cultura, 1924. Sobre la experiencia de Martínez Sobral consíderese que trabajó en Hacienda cuando Limantour todavía se encontraba al frente de la dependencia y desde entonces le eran encomendados trabajos delicados. Por ejemplo, fue él quien “confeccionó y redactó” la Iniciativa de Presupuestos para 1911 y 1912, cfr. carta de Roberto Núñez, subsecretario de Hacienda a J.Y. Limantour, del 16 de diciembre de 1910, CEH, CDLIV, rollo 71. Abogado de profesión, Martínez Sobral sería empleado por los revolucionarios incluso para servicios personales, al respecto véase William D. King a Álvaro Obregón, 10 de enero de 1922, en AGN, FOC, exp. 802-K-2.

⁴⁰² *Idem*.

⁴⁰³ *Idem*. Otro signo en el que se pudo percibir este contraste fue en la discusión sobre la naturaleza “mixta” o “uniforme” de las comisiones. En el primer caso defendido por De la Fuente, aquéllas se integrarían por representantes de bancos de todos los géneros; mientras que en el segundo, defendido por los

La primera sesión terminó con las disculpas de Martínez Sobral y De la Fuente por la ausencia de Pani quien “por alguna circunstancia de ocupación urgente” no disponía de tiempo para declarar solemnemente inaugurada la Convención, por lo que propusieron que este acto se llevara a cabo el día siguiente a las 11 de la mañana.⁴⁰⁴ Los banqueros aceptaron recomendando que para fines de trabajo la Convención se reuniera hasta que las comisiones hubiesen adelantado en sus tareas, fijándose como fecha el 7 de febrero.

Mientras la reunión tenía lugar, en el Senado discutían el ex secretario de Hacienda, Luis Cabrera y Fernando Iglesias Calderón, el polémico historiador de la Reforma y el Imperio.⁴⁰⁵ Deliberaban a propósito de reuniones anteriores sostenidas con Pani, Aarón Sáenz, secretario de Relaciones Exteriores y los abogados consultores de esta Secretaría, los señores Fernández MacGregor y Aspe Suinaga; a su vez, dichas reuniones versaron sobre los acuerdos alcanzados en las reuniones de Bucareli. Hablaron también sobre los problemas que envolvían al bloque de la mayoría y al de la minoría del Senado, en éstos se reflejaban las facciones que combatían en el campo de batalla. Una semana antes se vieron signos claros de la animosidad que se vivía, el asesinato del senador campechano Francisco Field Jurado y el simultáneo secuestro de otros tres senadores cooperatistas: Ildefonso Vázquez, Enrique del Castillo y Francisco J. Trejo. La causa que enardecía los ánimos era la convocatoria del presidente para un periodo extraordinario de sesiones que tendría como objetivo central deliberar sobre los convenios de Bucareli y, en su caso, ratificarlos. Bajo el nuevo contexto la ratificación facilitaría el apoyo militar de Washington hacia el gobierno de Obregón y la pronta derrota de los delahuertistas. Y aunque la aprobación parecía cosa segura porque en el Senado reinaba una mayoría obregonista, los senadores proclives al “delahuertismo” boicoteaban la formación del quórum necesario para que el Senado se constituyera legalmente para deliberar sobre el tema.⁴⁰⁶ El razonamiento de la oposición

banqueros, aquéllas se formarían sólo por los miembros de una clase de bancos, fue en medio de esta discusión que Martínez Sobral propuso la formación de la quinta comisión para encontrar un punto de vista más amplio a los trabajos: la llamada Gran Comisión.

⁴⁰⁴Pani tampoco concurrió a la “sesión oficial inaugural” del 2 de febrero; fue el subsecretario León Salinas quien declaró la apertura.

⁴⁰⁵Sus desacuerdos eran más antiguos y tenían que ver con el rechazo de Iglesias Calderón hacia la Constitución de 1917, un sentimiento compartido con la mayoría de los viejos políticos porfirianos y también, aunque no en toda su amplitud, por lo más granado de la clase política revolucionaria. Álvaro Obregón mantuvo cierta simpatía con Iglesias en 1919 y ahora, ésta indirectamente le redituaba un servicio. Limantour consideró, paradójica o desinformadamente, que Iglesias Calderón “era el prototipo del puritanismo para los carrancistas”, véase su carta a Carlos Pereyra del 11 de diciembre de 1913, en CEH, CDLIV, rollo 71.

⁴⁰⁶Senadores obregonistas comenzaron a estudiar la cuestión del tratado desde noviembre de 1923. Uno de los promotores más activos, T.H. Orantes, senador por Chiapas, informó a Obregón de las sesiones

senatorial resulta sencillo de entender: buscaban obstaculizar la ratificación de los convenios de Bucareli, a los que calificaban como la claudicación de los principios revolucionarios y un acto de cesión de la soberanía que traicionaba a la patria, empleando el precepto que fijaba en dos terceras partes el quórum necesario para sancionar legalmente cualquier acuerdo. Francisco Field Jurado era el inspirador y el líder de esa estrategia.⁴⁰⁷

Las investigaciones de su asesinato atraían más la atención del público que los informes técnicos de las subcomisiones que integraban la convención bancaria. Las especulaciones sobre la posible consignación de Luis N. Morones, el opulento líder de la Confederación Regional de Obreros de México quien antes del homicidio clamó venganza por la muerte del líder laborista yucateco Felipe Carrillo Puerto en manos de presuntos delahuertistas, formaban parte de los corrillos populares que las atendían con ojos escépticos. Cuando el cadáver de Field Jurado todavía estaba fresco Obregón exculpó a Morones,⁴⁰⁸ pero éste no fue el único signo de que su campaña bélica continuaría extendiéndose al ámbito de la vida civil, pues días más tarde envió señales aún más claras a sus seguidores.⁴⁰⁹ En la Cámara de Diputados donde el delahuertismo había sido sometido se llegó entonces a escuchar la propuesta de suprimir a la de Senadores. Pero los obregonistas no hicieron eco a la idea porque después de los golpes ejecutados contra el Senado ya se preveía la ratificación de los acuerdos de Bucareli; “las aparentes discrepancias de criterio de los bloques senatoriales pertenecen al pasado..., el dictamen (al) que venimos refiriéndonos era indispensable para calmar la ansiedad de la opinión pública”, publicaba una prensa poco crítica junto con los textos íntegros de los tratados.⁴¹⁰

Con los asesinatos cautivando la atención pública, el 7 de febrero se reunió nuevamente la Convención Bancaria para dar lectura a los trabajos de las comisio-

secretas y los problemas por falta de quórum. Cfr. Orantes a Obregón, 16 de noviembre de 1923 y repuesta de Obregón del día siguiente, en AGN, FOC, exp. 104-L.

⁴⁰⁷ “El que dirigía las maniobras era Field Jurado. Él determinaba diariamente quiénes de los senadores cooperatistas deberían asistir a las sesiones y quiénes no. Se le veía en todas partes, mostrando una gran actividad. Diariamente el presidente (del Senado) Robinson citaba a sesión e invariablemente uno de los senadores delahuertistas reclamaba el quórum, y como realmente no estaban presentes los treinta y ocho representantes requeridos por la ley, se levantaba la sesión con gran disgusto de los callistas y los obregonistas”; cfr. Vito Alessio Robles (1936), *Desfile sangriento*. México, A. del Bosque, Impresor.

⁴⁰⁸ Cfr. el ambiguo mensaje de Obregón a Morones, 25 de enero de 1924, en *ibidem*. pp. 72 y ss.

⁴⁰⁹ Por ejemplo, Salas Barraza, el asesino confeso de Pancho Villa, condenado originalmente a 20 años de prisión, fue puesto en libertad el seis de febrero, desde luego debemos descartar la tesis del buen comportamiento para explicar su ex carcelación; más ilustrativas pueden ser las declaraciones que hizo a la salida de la cárcel en Ciudad Juárez, cuando prometió ir a Ciudad Jiménez y formar un cuerpo de voluntarios para combatir a los villistas. Cfr. *El Universal*, 6 de febrero de 1924.

⁴¹⁰ Cfr. *El Universal*, 2 de febrero de 1924.

nes y determinar la integración de la quinta, la denominada Gran Comisión. El receso dio pie a encuentros privados entre los banqueros, quienes acordaron que en la última comisión trabajarían los representantes de la Caja de Préstamos, Fernando L. Padilla y de la Comisión Monetaria, Gabriel Correa, con Agustín Legorreta (quien asistió con el poder de representación del Banco Nacional de México, del Mercantil de Veracruz y el de Tabasco), Guillermo Obregón Jr. (representaba al Occidental de México y al de Tamaulipas),⁴¹¹ Miguel Macedo (a quien también hemos visto ligado al Nacional), Creel (del Banco Minero de Chihuahua), Burgos (representando entonces al Internacional e Hipotecario de México), Weldon (cubriendo los intereses del Bank of Montreal), Palomino (los del Banco Central) y Salvador Cancino (Londres y México). En consecuencia, aunque la Gran Comisión mostraba cierto respeto por el equilibrio en su composición, no parece ser menos cierto que los antiguos bancos de emisión frenaron el ascenso de las casas bancarias⁴¹² e incluso parecieron ganar una representación mayor a la que les permitían sus capitales reales.

La reanudación de los trabajos de las subcomisiones con el aviso de que habría más tiempo para trabajar porque la Convención ya no terminaría el día 15, como originalmente se tenía programado, permitió una más cuidadosa deliberación y estudio de los dictámenes relativos a los bancos hipotecarios y agrarios. De igual modo se discutieron los requisitos que deberían cumplir los bancos extranjeros; así como a la determinación de los puntos generales que se proponían para ser incluidos en el nuevo proyecto de Legislación Bancaria. En la sesión del día 19 de febrero, se discutió sobre la determinación de los montos mínimos de operación para las organizaciones bancarias que operaran en el Distrito Federal y en los estados, inquietud que se había expresado desde la primera sesión y que volvía a consumir el mayor tiempo de la reunión, pues en ella se venían a refle-

⁴¹¹ Cabe puntualizar que Guillermo no fue familiar de Álvaro sino hijo de su homónimo, accionista del Banco de Tamaulipas. Padre e hijo conocieron a la banca mexicana en detalles verdaderamente finos, razón por la que he lamentado no haber gozado con la fortuna de localizar el estudio de *Reorganización Bancaria Nacional* realizado por Guillermo Obregón Jr., a finales de 1919, mismo que le habría permitido redactar una ley sobre la materia que entregó a su amigo Enrique Martínez Sobral para conocer su opinión y de la que también tuvo informado a Limantour. Al parecer Guillermo mantenía una relación muy cordial con el Nacional de México, a cuyo Consejo de Administración intentó pertenecer unos años atrás, cfr. carta de Obregón a Francisco León de la Barra, 7 de julio de 1920, CEH, x, doc. 1296. Su padre fue abogado en Tamaulipas y representante de la American Surety Company de Nueva York durante el porfiriato, llegó a fungir como contacto político de Limantour con muy destacados personajes del antiguo régimen como Teodoro Dehesa, pero también del nuevo, como Rafael Nieto.

⁴¹² Sobre este respecto, véanse las discusiones de los representantes de éstas con las de los antiguos bancos de emisión a propósito de los montos mínimos exigidos para constituir organizaciones financieras en la provincia, en *La Convención Bancaria de 1924, op. cit., e.g.*, pp. 103 y ss.

jar dos conceptos acuñados y dos visiones del futuro posible. Así mientras Creel observaba la insuficiente

escuela y práctica para el mecanismo de las instituciones bancarias. Igualmente debo llamar la atención sobre que carecemos de la práctica necesaria para la organización de las instituciones bancarias en cualquier Estado o en cualquiera población de la República, y que por consiguiente debemos limitar razonablemente el número de bancos para evitar fracasos por estos factores que repercutirían contra el crédito bancario.

Y después de relatar anécdotas sobre la retrasada concepción que existía del manejo fiduciario en los propios bancos de Chihuahua durante el porfiriato, concluyó: “yo soy muy conservador en este sentido; y a mi juicio conviene tomar toda clase de precauciones para evitar las frecuentes quiebras entre los pequeños capitalistas que se aventuran en negocios bancarios, desconociendo hasta lo que son las instituciones bancarias”. Por eso apoyaba el fijar un monto mínimo alto para el inicio de operaciones de los futuros bancos provinciales, mismo que calculaba en 250,000 pesos para poblaciones de 100,000 habitantes cercanas a la capital; mientras que para poblaciones lejanas donde hubiere menos de 100,000 habitantes, el capital podría ser de 100,000 pesos. El representante del Banco de Sonora, el señor Luis Brauer, contestó a Creel concediéndole la razón en el planteamiento general, pero poniendo el ejemplo del sistema bancario estadounidense, “donde el gran número de bancos ha contribuido tan considerablemente al desarrollo” y sugiriendo que montos mínimos bajos podrían propiciar el florecimiento de organizaciones financieras honorables, lo cual, en su concepto era la fuerza principal de un banco, además, claro está, del capital. Posteriormente, los miembros de la Gran Comisión conferenciaron con Brauer para aclararle que

puede tener razón en sus observaciones respecto a los Bancos que no son Hipotecarios ni Refaccionarios, sino que tan solo reciben depósitos; la verdad es que la Gran Comisión abarcó todas estas clases de bancos en un solo precepto, ahora insiste en que tratándose de Bancos Hipotecarios y Refaccionarios sería necesario un capital de 250,000 íntegramente exhibidos para establecimientos en el Distrito Federal o que funcionen en los Estados o Territorios.

Razón por la que se modificó la cláusula (sexta) que enviaría a la Secretaría de Hacienda bajo el título de “Disposiciones Generales sobre Instituciones de Crédito y su constitución”.⁴¹³

⁴¹³ *Idem.*

Del espontáneo alegato Creel-Brauer podemos entrever que las interrogantes formuladas en torno al acceso de nuevas organizaciones bancarias al sistema planeado por la Convención parecieron hacer más énfasis en el problema del acceso que en el de los instrumentos de supervisión sobre las organizaciones. ¿Se deberían abrir liberalmente las puertas con montos mínimos bajos, o se debían plantear restricciones con montos más elevados? Desde la voz de Creel la crítica a la liberalidad podría haber sido escuchada y entendida por los banqueros emergentes como una defensa de viejos monopolios; como una forma esquiva de argumentar en contra del acceso a nuevos competidores. Mientras que en el otro extremo, montos mínimos bajos parecían alentar el ingreso de nuevos participantes de escala pequeña que potencialmente podrían atender intereses de mercados locales relativamente aislados. En consecuencia, el breve alegato se presentó en forma dicotómica pues no hubo mayor discusión planteando otras alternativas viables; por ejemplo, si podría aceptarse una propuesta de puertas amplias restringiendo las actividades o funciones de los bancos de capital inicial más bajo, si la Gran Comisión –o cualquier otra instancia– debería cerciorarse del origen de esos capitales, si deberían predeterminarse áreas geográficas de actividad hasta que hubiesen incrementos de capital, si debía de crearse un órgano especial de supervisión bancaria con facultades amplias para intervenir bancos en riesgo o que incumpliesen el marco legal y, en suma, que hiciesen muy estricta para el banquero la salida del sistema. Pero, quizá por el entorno que rodeó a la Convención, en vez de alternativas no revisadas la mayoría de los banqueros parece haber creído que con la restricción de elevar los montos podrían asegurar mayor solvencia en el sistema.

Naturalmente, las noticias que difundía la prensa sobre los trabajos de la Convención alentaban a la clase empresarial.⁴¹⁴ En su cotidiana lectura se podían revisar algunos de los temas fundamentales que habían sido tratados como el de la disminución de las reservas exigidas por ley a los bancos, la no obligatoriedad de mantener reservas en oro cuando los depósitos que se les entregaran fuesen en plata (problema que se agravaba por el diferente valor de los metales) y cuando el banco sólo fungiera como intermediario (es decir, la no obligación de mante-

⁴¹⁴ Fue De la Fuente quien pidió al pleno de la Convención que se aceptara la divulgación de resultados: “para terminar, señores delegados, esta sesión, me permito hacer una sugestión, suplicándoles la acojan con la benevolencia que han venido acogiendo todos los actos de mi insignificante personalidad; es la siguiente: entiendo yo que para que una ley sea buena, debe en lo futuro dar los resultados que de ella se esperan; debe dársele la mayor publicidad posible con objeto de oír las críticas, los elogios, los comentarios que se hagan de los proyectos. En tal virtud, solicito autorización de la Asamblea para dar a la publicidad de la prensa diaria, los dictámenes que se han presentado”. Naturalmente, la posición de De la Fuente fue bien acogida por los banqueros; *Convención Bancaria de 1924*. México, Cultura, 1924.

ner reservas cuando se tratara de depósitos recibidos en sucursales pero destinados a las oficinas matrices); así como las modificaciones propuestas al marco jurídico que regulaba la actividad financiera. La Convención, trataba de resolver “dos ecuaciones que hasta ahora nadie se ha atrevido a plantear valientemente: la remoción de los obstáculos que la revolución dejó tras de sí al sostener la tesis destructora y ya sobre un terreno despejado construir una nueva ley que contendrá todas las enseñanzas que produjo el funcionamiento del imperfecto organismo derrumbado”,⁴¹⁵ comentaba en un editorial Miguel Sánchez de Tagle, periodista que expresó con nitidez la posición defendida por los intereses financieros y quien parecía contar con una buena fuente de información pues daría a conocer la mayoría de los acuerdos relevantes de la reunión antes de que éstos fueran emitidos por los voceros oficiales de la Convención. Sánchez de Tagle enfatizó la “equidad” con la que operaron los banqueros al haber excluido “cláusulas de privilegio para los bancos” que significaran “menoscabo para los intereses del público”. Subrayando que

las obligaciones pendientes (con el público) se liquidarán al expedirse el decreto correspondiente, dividiéndolas en obligaciones contraídas antes del régimen de circulación de papel moneda y las que se engendraron durante este periodo. Las primeras serán cubiertas en oro nacional, a la par y en plazos racionales de acuerdo con el monto del adeudo. Y las segundas, es decir, las de la época del papel moneda, se liquidarán conforme a las tablas de equivalencias establecidas en el artículo 10 de la ley del 13 de abril de 1918.⁴¹⁶

De esta manera, los intereses generados durante este último periodo también serían exigidos de acuerdo con las equivalencias de la antes mencionada tabla, aunque con la “previa reducción de su importe en metálico, al tipo del día en que se contrajeron”. Por su parte “los intereses causados durante el régimen de circulación de moneda, serán exigibles en oro nacional, a la par, al tipo pactado, pero sin capitalizar”. Con muy ligeras diferencias los bancos refaccionarios se sujetaban a estas condiciones. Las subcomisiones clasificaron estas medidas con la etiqueta de “disposiciones transitorias”. Sucedería sin embargo que las mencionadas obligaciones de los bancos hacia el público conocerían “plazos racionales” de varios años (comenzarían a pagarse en 1927 y terminarían en 1932), además de ser excluidas del beneficio de la capitalización.

⁴¹⁵Véase *El Universal*, 14 de febrero de 1924.

⁴¹⁶*Idem*. No está de más señalar que posteriormente encontraremos a Sánchez de Tagle como *Correspondant de l'Agence Economique et Financière de Paris*, cfr. carta s/f (probablemente abril de 1926) de Miguel Sánchez de Tagle a Luis Montes de Oca, contralor general de la nación, CEH, CMLXXV, doc. 3052.

Y mientras algunos periodistas adelantaban vísperas con información de mejor o menor calidad, en la Convención continuaban discutiéndose las reformas en materia de los préstamos refaccionarios, en donde se propusieron cambios al artículo 93 del decreto de 19 de junio de 1908; el que a su vez había reformado la Ley General de Instituciones de Crédito del 19 de marzo de 1897. Estas últimas habían tenido como trasfondo importantes crisis financieras y ambas habían sido paliadas por el gobierno de Porfirio Díaz por dos medios: introduciendo modificaciones legales para vigilar de modo más estrecho a sectores específicos del sistema bancario; así como creando bancos hipotecarios y refaccionarios como sucedió en Yucatán o a nivel federal con la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, los cuales tuvieron por objeto refinanciar al resto del sistema.⁴¹⁷

Y claro que la preocupación porque renacieran vicios fue manifestada durante las reformas propuestas en 1924. Se denostó entonces “la vieja práctica en la materia que una parte y a menudo la totalidad del préstamo refaccionario se empleara en objetos distintos a los del préstamo” cosa que “no sólo se hacía en perjuicio directo de los intereses del banco sino primeramente de la comunidad y después del progreso agrícola o industrial que se esperaba de la inversión del dinero prestado”. Previendo atavismos el artículo que elaboró la subcomisión se propuso corregir los problemas potenciales estableciendo facultades “dictatoriales” según las cuales el deudor, previo acuerdo con el banco, se comprometía a dictaminar sobre sus labores, la maquinaria a comprar, la determinación de gastos, jornales e insumos que demandara la “empresa refaccionaria”.

Como los bancos de emisión, los hipotecarios y refaccionarios se inscribían, para efectos legales, dentro de la categoría de los bancos de concesión federal. En esta categoría el Ministerio de Hacienda tenía especial preocupación por vigilar las garantías de los títulos en circulación, tanto como su redención oportuna. Esta preocupación había sido un tema importante para justificar la incautación carrancista. Justamente, en su famoso decreto del 4 de enero de 1914, Carranza había señalado que su gobierno no consideraría ningún título de crédito como elemento de garantía de los billetes de los bancos emisores. Al momento de su triunfo pidió cuentas sobre las reservas y la circulación, con los resultados que hemos visto en el capítulo primero: la mayoría de los bancos no estuvieron en condicio-

⁴¹⁷Véase *supra* nota 233 y Documento número 155, “Concesión para el establecimiento de la «Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, S.A.»”, en *Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al año económico de 1o. de julio de 1908 a 30 de junio de 1909, presentada por el secretario de Hacienda al Congreso de la Unión*. México, Tipografía de la Oficina de Estampillas, Palacio Nacional, 1910.

nes de ajustar su circulación y entraron a la incautación. Se abrogaron concesiones y fueron enviados a liquidación, pero en realidad ningún banco fue debidamente liquidado porque no se llegaron a establecer las bases sobre las que se debía llevar a cabo este proceso por lo que los litigios que suponía el proceso de revalidación de títulos fueron postergados. La tardanza inicial para resolver la situación de los bancos obedeció a que el gobierno de Carranza había decidido su incautación no sólo por considerarlos enemigos de la revolución, sino porque, dado el desprestigio de su papel moneda y la asfixiante necesidad de recursos que se vivía, el apoderamiento de sus reservas metálicas era una buena vía para hacerse de recursos frescos. Con el ascenso de Obregón, el proceso de incautación intentó ser revertido por la ley del 31 de enero de 1921 devolviendo los bancos liquidados a sus antiguos dueños y restituyendo su personalidad jurídica, pero sería hasta el gobierno de Calles que se establecerían convenios particulares con los bancos avanzándose algo en el arreglo de los citados títulos, pero prácticamente nada en su liquidación, la que sólo comenzaría a resolverse al final de la década.

Mientras las discusiones tenían lugar en la Convención, las inercias de los problemas por los que atravesaba el sistema bancario también continuaban su marcha. Así, curiosamente, el día de la plenaria el tema que trataba la prensa en relación con los asuntos bancarios no era el de los esperanzadores resultados de la Convención, sino el de la pragmática realidad de la liquidación de la “Banca Asturiana, Higinio Gutiérrez Peláez, S. en C.”. Tal y como sucedía con la mayoría de los casos, don Higinio señaló que si se cubrieran los créditos que la banca había concedido, su empresa estaría en condiciones de resolver cualquier asunto con sus acreedores. En el mismo tenor se recurrió al argumento de que su posición era sostenible; lo que parece coincidir con el tamaño de la empresa, pues todo indica que se trataba de una casa comercial pequeña: sus deudores sumaban la cantidad de 190,000 pesos y sus acreedores la de 93,000.⁴¹⁸

⁴¹⁸ La deuda más fuerte de la banca, además, era con el propio Gutiérrez Peláez, quien como gerente de la compañía también fungió como síndico en la liquidación ante el juzgado noveno de lo civil, llevando como colega de la liquidación al licenciado Agustín Barrios Gómez y de interventor al licenciado Luis Álvarez Flores. En realidad, la banca —que era una sociedad en comandita de Higinio y el señor Enrique del Río— estaba en liquidación desde tiempo atrás. En junio de 1922 ellos celebraron un convenio por el que del Río quedaría “encargado de la Administración y liquidación de las cuentas pendientes de la Banca Asturiana” e Higinio “de vigilar los asuntos judiciales que se ventilan en los juzgados”. Por eso Gutiérrez no se responsabilizaba “de los perjuicios que pudieran ocurrir, puesto que desde esa fecha no he tenido ninguna ingerencia en ningún negocio de la Banca, desde el momento en que me ausenté de ella, de acuerdo con el convenio expreso”. Uno de esos problemas fue el “embargo de bienes situados en la esquina de las calles de Revillagigedo y Minerva pertenecientes a Gutiérrez Peláez”; decreto que no se cumplió porque la propiedad fue vendida con anticipación, cfr. *El Universal*, febrero 15 de 1924.

Así, mientras continuaban los problemas, ya prácticamente cotidianos, del sistema bancario y cuando se daban a conocer las derrotas de la rebelión delahuertista en Ocotlán, Jalisco, y sus desplazamientos hacia el Istmo y Tabasco, en la Convención, la Gran Comisión presentaba su dictamen. Los aplausos no se hicieron esperar cuando Enrique Creel, el más genuino representante de la banca porfiriana, dio lectura a dos proyectos de la Comisión y celebró la propuesta de Pani sobre el Banco Único de Emisión: el primero se refirió al establecimiento “de las instituciones de crédito conocidas en el extranjero con el nombre de Compañías Bancarias de Fideicomiso y Ahorros”, o si se prefiere, estudiaba la posibilidad de introducir las sociedades de fideicomiso; el segundo, mucho más importante para la coyuntura, consistía en que el gobierno de Obregón concediera una moratoria a los antiguos bancos de emisión para pagar los cupones de los bonos o certificados provisionales que los bancos habían expedido a sus acreedores por el canje de los billetes que éstos habían emitido antes del triunfo carrancista.

Los años de gracia se solicitaron en calidad de “votos o recomendaciones” argumentando que dada “la situación general del país” era imposible que los bancos pudieran cobrar los créditos que existían a su favor. En consecuencia, la deficiente calidad de sus carteras hacía imposible que los intermediarios financieros cubrieran sus pasivos; por tal razón era

indispensable conceder una moratoria especial tanto para dichos bancos como para sus deudores (entre los cuales los gobiernos de la revolución ocupaban un lugar destacado) en que, conciliándose los intereses y derechos de cada una de las partes (de acuerdo con el decreto del 31 de enero de 1921), se facilite la vuelta de los bancos hipotecarios y refaccionarios al estado normal.⁴¹⁹

Así pues, el citado decreto, aquel con el que había iniciado la armonización de los intereses entre la banca y el gobierno obregonista, todavía no entregaba todos los frutos prometidos. Así también, las circunstancias de los antiguos bancos de emisión afectaban necesariamente al resto del sistema bancario incrementando los márgenes de riesgo de otros establecimientos bancarios (algo que se expresaba en la frecuencia con la que ocurrían las quiebras), dadas las grandes dificultades que se les presentaban para hacer frente a sus obligaciones.⁴²⁰ Ante

⁴¹⁹ Cfr. *El Universal*, 16 de febrero de 1924.

⁴²⁰ Al respecto pueden compararse la sección de estadística recogida por la *Memoria de la Secretaría de Hacienda de los años 1923, 1924 y 1925*, *op. cit.* Los datos ofrecidos por la Comisión Nacional Bancaria, en la que pese a registrarse la menor importancia de los antiguos bancos emisores frente al mayor peso de las

este panorama no podían pasar la oportunidad que les presentaba la Convención para crear mejores condiciones de negociación, solicitando tiempo para reoxigenar sus arcas. Desde esta perspectiva no extraña que las *recomendaciones* de la Convención a la Secretaría de Hacienda se hayan dirigido a la modificación de los artículos clave (*e.g.*, 19 fracción iv, 23 bis y 28 bis) del multicitado decreto. En tanto que éstos puntualizaban la moratoria, el establecimiento de una comisión mixta de reclamaciones compuesta por banqueros y funcionarios de la Secretaría de Hacienda, así como, no poca cosa, la capitalización de intereses por el apoderamiento de los caudales de los bancos de emisión durante el periodo revolucionario. En otros artículos se discutieron asuntos vinculados a franquicias e impuestos. No está de más recordar que el tema de la moratoria se había colocado en primer plano porque se encontraba muy próxima (julio) la fecha en que principiarían a vencerse los plazos señalados por el antedicho decreto para el canje de billetes y títulos de crédito, y se calculaba que el público tenía en su poder alrededor de 64 millones de pesos. En consecuencia, la posibilidad de su pronta exigencia era un motivo central en la inquietud de los banqueros y una razón por la que presionaban al gobierno obregonista para formalizar una prórroga a los reclamos en puerta y a los que se preveían en el mediano plazo.

Es también importante señalar que los representantes de los antiguos bancos emisores no tenían una posición unívoca, sino más bien dividida en torno al asunto de declarar una moratoria a sus obligaciones. La propuesta se hizo el 25 de febrero y fue discutida tres días después. En esta ocasión, Rodolfo M. Garza, representante del Banco de Nuevo León, contradujo los argumentos presentados por la Gran Comisión en favor de la moratoria. Uno de sus puntos centrales era el que el propio gobierno no les hubiera pagado los adeudos que tenía con ellos, lo que a su vez los imposibilitaba a cumplir sus obligaciones con sus deudores de acuerdo con el decreto del 31 de enero de 1921. Pero para Garza,

este argumento no (tenía) la fuerza que se le (quería) dar, toda vez que la cantidad total que el gobierno adeuda a los bancos apenas si basta para cubrir el veinticinco o treinta por ciento de lo que los bancos conjuntamente adeudan al público, y el resto que es la mayor cantidad, tendrán forzosamente que cubrirlo con el sobrante de su activo que tengan por otros capítulos.⁴²¹

sucursales de bancos extranjeros, establecimientos bancarios, así como bancos refaccionarios e hipotecarios, todavía conservaban cerca del 15 por ciento de las existencias en efectivo del conjunto del sistema bancario. Debe considerarse además que esta estadística ya integraba la suma de la cartera del Banco de México, lo que hacía disminuir la proporción representada por los antiguos bancos de emisión.

⁴²¹ *Convención Bancaria de 1924*. México, Cultura, 1924, p. 126.

Para Garza estaba perfectamente claro que los bancos solicitantes de la moratoria no habían cumplido con la mencionada ley y pretendían beneficiarse aplazando su cumplimiento, lo que introducía un elemento de competencia desleal a otros intermediarios que, como los que él representaba, habían hecho un esfuerzo positivo para cumplirla. Por ello él concluía: “Modificar las leyes al arbitrio de unos es sembrar la desconfianza y sin confianza no puede haber negocio.” Consideró como natural que después de darse publicidad oficial de la moratoria (pues ya se oían comentarios “bastante acres” en torno a su posibilidad), los deudores de los bancos “reclamaran iguales derechos”.

Creel entendió perfectamente la relevancia que tenía la intervención de Garza e hizo suya la primera respuesta. Inmediatamente atendió el asunto nodal, para Creel la deuda del gobierno federal con los bancos ascendía a 94 millones, mientras que su pasivo importaba 112; así, en sus cifras la deuda gubernamental oscilaba entre “un 80 o 90 por ciento” y no en un 25 por ciento por lo que en tono tajante afirmó: “queda, por lo tanto, destruido el argumento del señor Garza”. Luego citó la diferente historia regional de destrozos que causó la revolución para aludir a diferencias en el estado de los bancos, para nueva y finalmente pedir el ansiado tiempo: “esperar que vengan nuevas cosechas a todas esas poblaciones, a todas esas zonas y entonces los bancos lesionados irán recobrando lo que se les debe e irán llenando sus obligaciones”.⁴²²

Impasible y lacónico, Garza contestó:

Tengo muy poco que argumentar. No deseo entrar en polémica, porque no me encuentro capacitado para discutir en estos momentos; dejo en pie mis argumentaciones y suplico a la Presidencia que las deliberaciones de esta H. Asamblea, queden sujetas a la resolución de la Secretaría de Hacienda, ya que posteriormente será ella quien tenga que dar el fallo final. La asamblea ha oído las argumentaciones del señor Creel; ha oído las brevísimas mías, y podrá oír algunas más, indudablemente; y al formular su juicio definitivo comprenderá que será la Secretaría de Hacienda la que tenga que resolver este punto.

Pero Garza no olvidó, sin embargo, refutar los guarismos de Creel, diciendo que si bien, por falta de balances, no conocía los datos recién aportados; “no ignoro que en lugar de 94’000,000 que reclaman los bancos, el Gobierno hasta ahora no les ha reconocido más que alrededor de 50’000,000 en números redondos”. Pero al contraste de las cifras habría también que sumar los pronunciamientos críticos que hizo Garza al comienzo de su estudio en contra de la moratoria: “Patrocinar la moratoria dentro del seno de esta Convención presentaría ante el público

⁴²² *Idem.*

a todos los bancos que la forman como partidarios de ella y forzosamente resultaría en menoscabo de su prestigio”.⁴²³ En consecuencia, el riesgo moral podía ser mayor que el costo de un nuevo retraso de los pagos.

Pani, quien conocía cotidianamente de los pormenores de la Convención, hizo presencia en ésta el 29 de febrero para clausurarla oficialmente con un mensaje político y, porque parecía venir al caso, también recordó su propio desarrollo profesional sorteando dificultades hasta obtener “algunos buenos éxitos, a pesar de mi falta de preparación técnica especial, debido a la eficacia de esta receta: sobre la base del desprecio de los intereses personales transitorios, ante los colectivos permanentes, recibir con modestia todos los consejos, seleccionarlos adecuadamente con serenidad de criterio, y realizarlos con honradez, perseverancia y energía”. Así, receta en mano, Pani recogió las preocupaciones enarboladas por los representantes de la banca e incluso añadió argumentos que las respaldaban.⁴²⁴ Sus declaraciones, pero más aún las reformas legales que se introducirían en el curso de 1924, vendrían a inaugurar una nueva relación con la banca. Efectivamente, habría concesiones importantes, como el de la moratoria. Tema que recorrió por entero el planteamiento con el que Creel contestó el discurso de Pani. Sin embargo, también los administradores de la revolución ensayarían nuevos mecanismos de regulación creando instituciones como la Comisión Nacional Bancaria (fundada en diciembre de 1924) o reformando la legislación porfiriana de comercio en lo referente al capítulo de las quiebras y las liquidaciones judiciales (decreto del 30 de agosto de 1924), las que por dilaciones de la práctica de jueces, síndicos, procuradores e interventores ocasionaban, las más de las veces, que los acreedores se olvidaran de sus créditos.

La prensa subrayó que los resultados de la Convención estaban “lejos de estar fundados en mezquinas conveniencias”; más bien tenían “amplitudes generosas”.⁴²⁵ Fue así ampliamente enjuiciada de “no oficialista”. En un sentido, estos juicios eran correctos; ciertamente, la Convención había expresado la posición

⁴²³ *Idem.*

⁴²⁴ Y añadiría lo más importante, las acciones. Que después también se resumirían en argumentaciones: “considerando que la mayoría de los billetes ha sido objeto de constantes especulaciones y que, como consecuencia, no se encontraba ya en poder de sus primitivos poseedores —que son los que merecerían, en el caso, una decidida protección— y sin olvidar (el Ejecutivo Federal) sus propósitos de rehabilitación bancaria, estableció en el decreto del 15 de julio de 1924 un sistema cuyas características son: moratorios reducidos para el pago de bonos, certificados y cupones emanados del canje de billetes y demás obligaciones de estos Bancos”. Cfr. *Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente a los años fiscales de 1923-1924-1925, presentada por el C. Secretario de Hacienda ingeniero Alberto J. Pani al Congreso de la Unión con especial referencia al periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 1923 y el 31 de diciembre de 1925*. México, Talleres de la Editorial Cultura, 1926. t. 1, p. 340.

⁴²⁵ Cfr. *El Universal*, 19 de febrero de 1924.

de los intermediarios financieros y éstos no habían manifestado una postura oficial, pues habían defendido, y por cierto, muy bien, sus ya viejos intereses; sin embargo, como hemos visto, se podrían cuestionar “las amplitudes generosas”, de los acuerdos alcanzados, por ejemplo, con su propuesta de demorar el pago a sus antiguos clientes. Cabría una pregunta de contraste: ¿hasta dónde los gobiernos de la revolución sostendrían los postulados de los banqueros y en qué punto los abandonarían intentando definir un nuevo sistema bancario? La respuesta a preguntas de este tipo comenzaría a aclararse con las reformas promovidas a la legislación bancaria durante el resto de 1924;⁴²⁶ con la definición del modo en que sería integrado el Banco Único de Emisión y con la mayor participación del Estado en el sector financiero (algo que sería más tangible durante el gobierno del nuevo Presidente de la República, Plutarco Elías Calles, sobre todo en los proyectos de crédito agrícola). En consecuencia, la respuesta no fue unívoca sino que avanzó apoyando a la banca privada en el nivel institucional (diseño de nuevas leyes), mientras por camino alterno impulsaría una banca “social” (hoy diríamos, de *desarrollo*) que privilegiaba el progreso del campo y un banco central para regular la política monetaria e intentar financiar las crecientes necesidades del Estado mexicano.

Sin embargo, la aparición de organizaciones con nuevos perfiles no serían mencionadas en la clausura de la Convención. Ahí, Pani dio cuenta de la difusión periodística de la Primera Convención Bancaria, reflexionó también sobre los alcances de la nueva relación que se abría con la banca; pero no para recoger los sintéticos calificativos con los que se enjuiciaba a la Convención, su “generosidad” y su carácter “no oficial”, sino para subrayar la credibilidad del programa de “redención económica del pueblo mexicano” que pregonaba –pese a guerras y tratados pendientes– el régimen obregonista.⁴²⁷ Un programa de reconstrucción que se debería cumplir con el pronunciamiento de acuerdos y el señalamiento de diferencias. Pero esto también había que hacerlo políticamente, con discreción y sin adelantar vísperas. Creel podía decir: “debemos felicitarnos de que el señor ministro de Hacienda haya propuesto que una comisión de esta Asamblea se

⁴²⁶La ley del 14 de agosto de 1924 relativa a suspensiones de pagos en bancos. La Ley del 29 de septiembre sobre bancos refaccionarios. La ley general de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios del 24 de diciembre. Y, aunque no quedó inscrita en el calendario de ese año, pero sí entre los efectos de la Convención, la Ley sobre Compañías de Fianzas del 11 de marzo de 1925. Cfr. *Idem*.

⁴²⁷Cfr. Alberto J. Pani, “Discurso de clausura de la primera Convención Bancaria”, en *Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente a los años fiscales de 1923-1924-1925, presentada por el C. secretario de Hacienda ingeniero Alberto J. Pani al Congreso de la Unión con especial referencia al periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 1923 y el 31 de diciembre de 1925*. México, Talleres de la Editorial Cultura, 1926, I, p. 211.

ocupe de estudiar el establecimiento” del futuro banco de emisión. Sin embargo, el papel de Pani era el de pulsar y el de “elevar” los votos y las recomendaciones propuestos por los banqueros a “la superior consideración del señor Presidente”. Pidió finalmente a la asamblea que las convenciones ocurrieran anualmente (pero esto no ocurriría así, probablemente porque sintió que la Convención no había encontrado suficiente eco en las expectativas de los revolucionarios) y que hubiese una Comisión Permanente integrada por “las personas que estén mejor capacitadas” y para la que los banqueros designaron inmediatamente a los miembros de la Gran Comisión; pues ésta sería el mejor *trait d' union* con las asambleas generales y la instancia responsable de velar “por la ejecución de los *votos* emitidos”, así como la preparación de las labores de convenciones subsiguientes y anunciándose también como el contacto natural entre la banca y la Secretaría de Hacienda. A la luz de los acuerdos, los objetivos de la Convención parecían haberse consumado. Faltaban ahora diversos balances que esperar: el de los gastos de la rebelión delahuertista, los que suponía la renovación de los pagos de la deuda con el Comité Internacional de Banqueros (mismos que no pudieron afrontarse) y el balance político que hicieron de la Convención, Obregón, Pani y el futuro presidente del país, Plutarco Elías Calles.